



RESEÑA LEGISLATIVA

ISSN 0717-0416

Nº 1353

12 de Octubre de 2018

SALA CUNA UNIVERSAL

BOLETÍN 12026-13

RESEÑA LEGISLATIVA es una publicación de
LIBERTAD Y DESARROLLO
DIRECTOR RESPONSABLE: Luis Larraín A.
EDITOR: Pablo Kangiser G.
DIRECCIÓN: Alcántara 498, Las Condes, Santiago,
Chile.



RESEÑA LEGISLATIVA

Nº 1353

12 DE OCTUBRE DE 2018

ÍNDICE

SALA CUNA UNIVERSAL

BOLETÍN 12026-13

OPINIÓN EJECUTIVA	4
CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY	5
COMENTARIOS DE MÉRITO EN GENERAL	8
TEXTO DEL PROYECTO DE LEY.....	11
ARTÍCULOS TRANSITORIOS.....	40
ANEXO I.....	42
ANEXO II.....	44

SALA CUNA UNIVERSAL


DESCRIPCIÓN BOLETÍN 12026-13

REFERENCIA	Crea el beneficio social de educación en el nivel de sala cuna, financiado por un fondo solidario bajo en materia de trabajo a distancia
INICIATIVA	Mensaje presidencial
ORIGEN	Senado
MINISTERIOS	De Educación, De Hacienda, De Justicia y Derechos Humanos, De La Mujer y Equidad de Género, De Salud, y Del Trabajo y Previsión Social
INGRESO	17 de agosto de 2018
ARTICULADO	Cincuenta y cuatro artículos permanentes, y once artículos transitorios

OPINIÓN EJECUTIVA DE LYD

Conforme a la actual legislación, sólo se puede acceder al beneficio de sala cuna en la medida que una determinada empresa reúna un mínimo de 20 trabajadoras. En este contexto, el Ejecutivo ingresó un proyecto de ley, conocido como Sala Cuna Universal, que viene a modificar la regulación vigente, suprimiendo dicho límite de trabajadoras.

El proyecto propone básicamente la creación del beneficio social de educación parvularia en nivel de sala cuna, estableciendo quienes son sus beneficiarios, los requisitos para acceder al beneficio, la exigibilidad, el monto, forma de pago, procedimiento de solicitud, suspensión del beneficio, financiamiento, su administración, implementación, entre otros. Además, se proponen modificaciones al Código del Trabajo y a otros cuerpos legales.

En definitiva, la propuesta del gobierno busca eliminar sesgos en la contratación de mujeres, lo que es correcto, ya que la mayor incorporación femenina al mercado laboral es un elemento positivo, tanto en términos de crecimiento del PIB como en productividad. Sin embargo, existen elementos de la iniciativa legal presentada que resultaría interesante revisar con mayor profundidad en su debate legislativo. A modo ejemplar, la fórmula de financiamiento propuesta provoca inquietudes, en cuanto crea un nuevo impuesto al trabajo y se redirigen fondos que el Estado debe aportar al seguro de cesantía para financiar ahora este beneficio de Sala Cuna Universal. Por otro lado, y sin perjuicio de las políticas públicas existentes en la materia, también es debatible si no era mejor avanzar hacia una política social más focalizada en los sectores de menores ingresos y financiada con fondos generales de la nación 

CONTENIDO DEL **PROYECTO DE LEY**

La iniciativa legal objeto de análisis tiene por finalidad fomentar la participación laboral femenina, promover el principio de corresponsabilidad, superar la discriminación por el número de trabajadores de una empresa, disminuir las brechas salariales entre hombres y mujeres, garantizar que todo hijo de madre trabajadora hasta 2 años tenga derecho a sala cuna y, finalmente, incorporar elementos de solidaridad en el mundo del trabajo.

En particular la iniciativa propone lo siguiente:

1. Creación del beneficio social de educación parvularia en nivel de sala cuna a través de un fondo solidario:

- Se propone 3 clases de beneficiarios: (i) La madre trabajadora de un niño o niña menor de 2 años; (ii) El padre trabajador de un niño o niña menor de 2 años y que tenga el cuidado personal del niño de manera exclusiva; (iii) El trabajador al que, por sentencia judicial, se le haya confiado el cuidado personal de un niño o niña menor de dos años. En el caso del número 1, se establece que el padre podrá solicitar el beneficio en representación de la madre beneficiada, en el cual prevalecerá la opinión de la madre.
- Se establecen los requisitos para acceder al beneficio: (i) Ser trabajador dependiente a la fecha de la solicitud del beneficio; (ii) En el caso de los trabajadores independientes, deberán: a) estar afiliados al sistema previsional con un mínimo de un año; b) registrar 6 o más cotizaciones previsionales continuas o discontinuas, dentro de los 12 meses anteriores a la solicitud; y c) estar al día en el pago de dichas cotizaciones. Los requisitos deben concurrir de manera copulativa, en el caso de los trabajadores independientes.
- Se propone un monto del beneficio, el cual será de hasta 5,14 UTM (\$245.000 aprox.), para el pago del establecimiento que elija el trabajador. Y su pago será por cada niño menor de 2 años. Asimismo, incluye el pago de una matrícula por el mismo valor, por una sola vez en un año calendario.
- Se establece el pago del beneficio conforme a la jornada laboral del trabajador, dividiéndose en tres tramos: (i) Jornada superior a 30 horas semanales o aquellos

excluidos de la jornada laboral conforme a la ley tendrán derecho a la totalidad del beneficio; (ii) Jornada menor a 30 e igual o mayor a 15 horas semanales, tendrán derecho a dos tercios del monto del beneficio; y (iii) Jornada inferior a 15 horas semanales, no tendrán derecho al beneficio.

- Se suspenderá el beneficio en caso que el menor posea una asistencia menor al 50% en un período de 60 días corridos, lo que deberá ser notificado. En caso de una segunda suspensión dentro del mismo año calendario, no podrá solicitarse nuevamente el beneficio en ese período. No se considerarán para el cómputo de asistencia: (i) Ausencias justificadas por certificado médico; (ii) Cuando el menor esté impedido de asistir al establecimiento en razón del uso del feriado legal del trabajador beneficiario, o cuando éste goce de licencia médica; (iii) Cualquier otra causa grave que no sea imputable al trabajador.
- En relación al financiamiento del fondo, se compone de cinco fuentes, a saber: (i) una cotización de un 0,1%, calculado sobre las remuneraciones imponibles de los trabajadores dependientes, de cargo del empleador o la entidad pagadora de subsidios y, en el caso de los trabajadores independientes, se calculará sobre las rentas imponibles; (ii) con un aporte anual del Estado de 225.792 UTM; (iii) multas, reajustes e intereses que se apliquen en razón de la Ley N° 17.322; (iv) con la rentabilidad que genere la inversión de los recursos, y finalmente (v) con los reintegros en conformidad al inciso segundo del artículo 49 del presente proyecto. En particular este último, se trata de aquellos casos de obtención indebida del beneficio para sí o para terceros, mediante el cual el infractor deberá restituir al Fondo las sumas indebidamente percibidas y reajustadas conforme al IPC.
- Para los efectos de la recaudación y pago del beneficio, se establecerá un fondo especial. La administración del beneficio y del Fondo estarán a cargo de una sociedad anónima constituida en Chile o agencia de una extranjera constituida en Chile ("Sociedad Administradora"), que deberá recaudar las cotizaciones correspondientes, invertir los recursos del Fondo y otorgar y administrar el beneficio de sala cuna. Esta sociedad administradora será aquella que resulte adjudicada tras un proceso de licitación pública.
- La Superintendencia de Pensiones será el organismo competente para realizar las funciones supervigilancia, control y fiscalización del beneficio y del Fondo, para lo cual podrá dictar normas e instrucciones a la Sociedad Administradora.

- Por otra parte, en relación a la implementación de la ley se señala que:
 - (i) El inicio de la Sociedad Administradora será en un plazo de 12 meses desde la publicación de la ley;
 - (ii) Respecto a la obligación de declaración y pago de cotizaciones, en el caso de los trabajadores dependientes comenzará a regir conjuntamente con la fecha de inicio de las operaciones de la Sociedad Administradora. En el caso de los trabajadores independientes serán 12 meses desde la fecha de inicio de las operaciones de la Sociedad Administradora;
 - (iii) El inicio de las prestaciones del beneficio para los trabajadores dependientes comenzará a otorgarse a partir del sexto mes siguiente al inicio de las operaciones de la Sociedad Administradora. En el caso de los trabajadores independientes a partir del décimo octavo mes siguiente al inicio de las operaciones de la Sociedad Administradora.

2. Modificaciones al Código del Trabajo:

Se establecen modificaciones a las normas que regulan actualmente el derecho a sala cuna. En este sentido, el proyecto establece el derecho de toda madre trabajadora para acceder al beneficio de sala cuna, sin importar cuantas mujeres trabajan en la empresa.

3. Modificaciones a otros cuerpos legales:

- A la Ley N° 19.728, la cual crea el seguro de desempleo, derogando el aporte del Estado al fondo solidario de cesantía.
- A la Ley N° 18.833, la cual establece un nuevo estatuto general para las cajas de compensación de asignación familiar, permitiendo constituir sociedades con el objeto de administrar el beneficio y el fondo

IV. COMENTARIOS DE MÉRITO EN GENERAL

ANTECEDENTES GENERALES

En la actualidad sólo un grupo de mujeres trabajadoras tiene derecho a servicios de sala cuna, lo que no ha contribuido a mejorar la participación de las mujeres en el mercado laboral. Se ha intentado salvar tal situación con diversas iniciativas desde el año 2011 a la fecha, con la finalidad de modificar el actual artículo 203 del Código del Trabajo, y la consecuente barrera que conlleva. A modo ejemplar, se mencionan entre otras, las siguientes iniciativas¹:

- Proyecto de ley que modifica el artículo 203 del Código del Trabajo, ampliando el derecho a Sala Cuna para hombres y mujeres trabajadoras (Boletín N° 2030-13, del año 2011);
- Proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo, con el objeto de ampliar el derecho a la sala cuna (Boletín N° 9340-13, del año 2014);
- Proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo en materia de procedencia del derecho a sala cuna (Boletín N° 9969-13, del año 2015);

Según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas, Chile es un país con baja participación laboral femenina. Desde el 2010, esa participación ha aumentado de un 44,3% a una reciente tasa de

48,8% (Fuente: INE). Si bien esto da cuenta de un avance está muy por debajo de la tasa de participación laboral masculina, y además, se encuentra muy por debajo del promedio de los países OCDE. En este último caso sobre la base de información de la OCDE, Chile ocupa el séptimo lugar con la menor tasa de participación laboral femenina, con un 57,1% al 2017, por debajo del promedio de los países de la Organización que alcanza un 64%.

Por lo tanto, el proyecto pretende hacerse cargo, en primer lugar, de eliminar la discriminación a que se refiere el artículo 203 del Código del Trabajo, el cual dispone que solo tienen derecho al beneficio aquellas mujeres que presten servicios en empresas donde trabajen veinte o más mujeres. En segundo lugar, propicia el principio de corresponsabilidad del cuidado de los hijos durante la jornada laboral.

BENEFICIARIOS Y MONTO DEL BENEFICIO

En primer lugar, el proyecto de ley establece en su artículo segundo quienes podrán acceder al beneficio, distinguiendo tres clases de beneficiarios, a saber:

1. La madre trabajadora de un niño o niña menor de dos años de edad;

¹ Informe de productividad para el proyecto de ley que crea un beneficio social de educación en nivel de sala cuna financiado por un fondo solidario.

2. El padre trabajador de un niño o niña menor de dos años de edad y que tenga el cuidado personal de manera exclusiva; y
3. El trabajador al que, por sentencia judicial, se le haya confiado el cuidado personal de un niño o niña menor de dos años de edad.

Asimismo, agrega que, en el caso del número 1, el padre podrá solicitar el beneficio en representación de la madre beneficiada, en lo cual prevalecerá la opinión de la madre.

Esta norma no hace referencia alguna a un número mínimo de trabajadoras o de trabajadores; es decir, para acceder al beneficio solo importará ser trabajador dependiente o independiente, cumpliendo los demás requisitos establecidos en el proyecto. En consecuencia, se amplían los sujetos beneficiarios.

En segundo lugar, el proyecto de ley establece en su artículo sexto el monto del beneficio, el cual asciende a 5,14 UTM, es decir, \$245.000 (actualmente), el cual será pagadero directamente a la institución o establecimiento elegido por el trabajador. Sin embargo, el monto podrá variar según la cantidad de horas trabajadas, siendo nulo el aporte en caso de que se trabaje menos de 15 horas semanales.

Al respecto, hay que tener presente las siguientes consideraciones:

Primero, estudios de mercado arrojan que el precio promedio de las salas cunas, a nivel nacional, bordearía los \$300.000, por lo que el monto propuesto en el proyecto no sería suficiente, lo que de alguna manera limita a aquellas personas con sueldos bajos, debido a que podrían ver afectada su decisión de salir a

trabajar porque no están en condiciones de cubrir la diferencia existente entre el precio efectivo de la sala cuna y el monto otorgado por el Estado.

Es por esto que pareciera ser más eficiente, en adelante, focalizar la ayuda a aquellas personas con menores ingresos, generando así un mejor uso de los recursos y, por otra parte, estableciendo el beneficio social solo para aquellas personas que lo requieran por su situación socioeconómica. En otros términos, es discutible entregar este beneficio hacia delante de manera universal, puesto que desde el punto de vista de las políticas públicas, es factible plantear que la entrega de este tipo de ayudas debe ir dirigida a quienes más lo necesitan.

FINANCIAMIENTO SOLIDARIO

El proyecto de ley se refiere a este punto en el artículo 16, estableciendo cinco fuentes de financiamiento, que son las siguientes:

1. Una nueva cotización de un 0,1%, con cargo al empleador, calculado sobre las remuneraciones imponibles de los trabajadores dependientes, y sobre las rentas imponibles de los trabajadores independientes.
2. Con un aporte anual del Estado de 225.792 UTM, es decir, \$10.840 millones.
3. Multas, reajustes e intereses que se apliquen en razón de la Ley N° 17.322, que establece normas para la cobranza judicial de cotizaciones, aportes y multas de las instituciones de seguridad social.

4. Con la rentabilidad que genere la inversión de los recursos.
5. Con los reintegros en conformidad al inciso segundo del artículo 49, que se refiere a las sumas percibidas indebidamente.

Según lo que explica el Informe de Productividad de la iniciativa, esta forma de financiamiento busca que los costos de sala cuna dejen de recaer únicamente en la contratación de mujeres. Sin embargo, existen aspectos cuestionables.

En relación con la nueva cotización con cargo al empleador, se crea un nuevo impuesto al trabajo, encareciendo la contratación y, por lo tanto, incentivando la informalidad laboral. Junto con ello, significaría un precedente para financiar beneficios sociales en un futuro en base a nuevos incrementos de la cotización obligatoria.

SEGURO DE CESANTÍA

Por otra parte, se propone una modificación a la Ley N° 19.728, derogándose el literal c) del inciso primero del artículo 5, el cual establece el aporte del Estado al seguro de cesantía. La finalidad de tal derogación es la redirección a futuro de los fondos, debido a que éstos están acumulando más recursos de los que debería, no interviniendo los recursos acumulados. Sin embargo, tal propuesta resulta cuestionable, ya que en principio el destino de esos fondos era prestar protección ante la eventual pérdida de ingresos en situaciones de desempleo. Si por algún motivo este fondo está acumulando más de lo que debería, sería conveniente entonces que se revisara la cotización de este seguro, para reducirla ■■■■

V. **TEXTO DEL** PROYECTO DE LEY

TÍTULO I

CREA EL BENEFICIO SOCIAL DE EDUCACIÓN

PARVULARIA EN NIVEL DE SALA CUNA FINANCIADO POR UN FONDO SOLIDARIO

Párrafo 1°

Del Beneficio Social de Educación Parvularia en Nivel de Sala Cuna

Artículo 1°.- Beneficio Social de Sala Cuna. Créase un Beneficio Social de Educación Parvularia en Nivel de Sala Cuna, en adelante, el “Beneficio”, en las condiciones previstas en esta ley, cuya regulación y fiscalización corresponderá a la Superintendencia de Pensiones, en adelante la “Superintendencia”, sin perjuicio de las competencias que correspondan a otros organismos fiscalizadores.

El Beneficio será administrado por una sociedad anónima denominada Sociedad Administradora del Fondo de Sala Cuna, en adelante la “Sociedad Administradora”, que se regulará conforme a las disposiciones que establece la presente ley.

Párrafo 2°

Del Régimen del Beneficio

Artículo 2°.- Beneficiarios. Tendrán derecho a acceder a las prestaciones del Beneficio:

- a) La madre trabajadora de un niño o niña menor de dos años;
- b) El padre trabajador de un niño o niña menor de dos años y que tenga el cuidado personal de manera exclusiva;

- c) El trabajador al que, por sentencia judicial, se le haya confiado el cuidado personal de un niño o niña menor de dos años.

En el caso de la letra a), el padre del niño o niña menor de dos años podrá solicitar el Beneficio en representación de la madre beneficiaria de acuerdo a lo establecido en el artículo 10° de la presente ley.

Tendrán derecho al Beneficio los trabajadores señalados en el inciso primero que sean dependientes del sector privado o sean trabajadores independientes que cumplan los requisitos establecidos en la presente ley.

Artículo 3°.- Requisitos. Para acceder a las prestaciones del Beneficio, se requerirá cumplir con los siguientes requisitos:

- a) Ser trabajador dependiente a la fecha de la solicitud de acceso al Beneficio.
- b) En el caso de trabajadores independientes registrar afiliación al sistema previsional con un mínimo de un año, y registrar 6 o más cotizaciones previsionales, continuas o discontinuas, dentro de los 12 meses anteriores a la fecha de la solicitud de acceso al Beneficio, y estar al día en el pago de dichas cotizaciones, entendiendo por esto el haber pagado las cotizaciones el mes anterior a la solicitud del beneficio.

En el caso de trabajadores independientes a los que se refiere el artículo 89°² del decreto ley N° 3.500, de 1980, se entenderá también cumplido el requisito establecido en la letra b) precedente, si el trabajador cumple con la obligación de pago de cotizaciones previsionales en la última declaración anual de impuesto a la renta con fecha anterior a la solicitud del beneficio.

Artículo 4°.- Verificación requisitos y condiciones. La Sociedad Administradora deberá verificar el cumplimiento de los requisitos y condiciones establecidas en la presente ley que habilitan al trabajador a tener acceso al Beneficio.

Mientras no se acredite el cumplimiento de los requisitos que hacen procedente el Beneficio, la Sociedad Administradora no podrá efectuar los pagos del mismo.

2 Artículo 89.- Toda persona natural que, sin estar subordinada a un empleador, ejerza individualmente una actividad mediante la cual obtiene rentas del trabajo de las señaladas en el inciso primero del artículo siguiente, deberá afiliarse al Sistema que establece esta ley.

La primera cotización efectuada a una Administradora por un independiente, produce su afiliación al Sistema y su adscripción al Fondo por el que éste opte. En todo caso, se aplicará lo establecido en los incisos tercero y quinto del artículo 23.

Artículo 5°.- Exigibilidad del Beneficio. El presente Beneficio será exigible una vez concluido el permiso postnatal parental de doce semanas del artículo 197° bis inciso primero³ del Código del Trabajo.

En caso que se opte por el permiso postnatal parental, en la modalidad de 18 semanas que contempla el artículo 197 bis inciso segundo⁴ del Código del Trabajo, el Beneficio será exigible una vez que este se inicie. En este caso, el trabajador podrá acceder al Beneficio, de manera proporcional a la jornada convenida con el empleador, procediendo, en todo caso un valor máximo de dos tercios del monto del Beneficio establecido en el artículo 6°, considerando en todo caso lo dispuesto en el artículo 8° de la presente Ley.

En caso de que sea el padre quien estuviere haciendo uso del permiso postnatal parental se aplicarán a su respecto las reglas anteriores.

3 Art. 197 bis. Las trabajadoras tendrán derecho a un permiso postnatal parental de doce semanas a continuación del período postnatal, durante el cual recibirán un subsidio cuya base de cálculo será la misma del subsidio por descanso de maternidad a que se refiere el inciso primero del artículo 195.

4 Artículo 197 bis, inciso segundo: Con todo, la trabajadora podrá reincorporarse a sus labores una vez terminado el permiso postnatal, por la mitad de su jornada, en cuyo caso el permiso postnatal parental se extenderá a dieciocho semanas. En este caso, percibirá el cincuenta por ciento del subsidio que le hubiere correspondido conforme al inciso anterior y, a lo menos, el cincuenta por ciento de los estipendios fijos establecidos en el contrato de trabajo, sin perjuicio de las demás remuneraciones de carácter variable a que tenga derecho.

El trabajador tendrá el derecho a exigir el Beneficio aun cuando esté autorizado para ausentarse o reducir su jornada de trabajo en virtud de una incapacidad temporal, o en razón del uso de los permisos regulados en los artículos 195⁵, 196⁶, 197 bis⁷, 1998 y 199 Bis⁹ del Código del Trabajo.

- 5 Art. 195. Las trabajadoras tendrán derecho a un descanso de maternidad de seis semanas antes del parto y doce semanas después de él.

El padre tendrá derecho a un permiso pagado de cinco días en caso de nacimiento de un hijo, el que podrá utilizar a su elección desde el momento del parto, y en este caso será de forma continua, excluyendo el descanso semanal, o distribuirlo dentro del primer mes desde la fecha del nacimiento. Este permiso también se otorgará al padre que se encuentre en proceso de adopción, y se contará a partir de la notificación de la resolución que otorgue el cuidado personal o acoja la adopción del menor, en conformidad a los artículos 19 y 24 de la ley N° 19.620. Este derecho es irrenunciable.

Si la madre muriera en el parto o durante el período de permiso posterior a éste, dicho permiso o el resto de él que sea destinado al cuidado del hijo corresponderá al padre o a quien le fuere otorgada la custodia del menor, quien gozará del fuero establecido en el artículo 201 de este Código y tendrá derecho al subsidio a que se refiere el artículo 198.

El padre que sea privado por sentencia judicial del cuidado personal del menor perderá el derecho a fuero.

Los derechos referidos en el inciso primero no podrán renunciarse y durante los períodos de descanso queda prohibido el trabajo de las mujeres embarazadas y púérperas.

Asimismo, no obstante cualquier estipulación en contrario, deberán conservárseles sus empleos o puestos durante dichos períodos, incluido el período establecido en el artículo 197 bis.

- 6 Art. 196. Si durante el embarazo se produjere enfermedad como consecuencia de éste, comprobada con certificado médico, la trabajadora tendrá derecho a un descanso prenatal suplementario cuya duración será fijada, en su caso, por los servicios que tengan a su cargo las atenciones médicas preventivas o curativas.

Si el parto se produjere después de las seis semanas siguientes a la fecha en que la mujer hubiere comenzado el descanso de maternidad, el descanso prenatal se entenderá prorrogado hasta el alumbramiento y desde la fecha de éste se contará el descanso puerperal, lo que deberá ser comprobado, antes de expirar el plazo, con el correspondiente certificado médico o de la matrona.

Si como consecuencia del alumbramiento se produjere enfermedad comprobada con certificado médico, que impidiere regresar al trabajo por un plazo superior al descanso postnatal, el descanso puerperal será prolongado por el tiempo que fije, en su caso, el servicio encargado de la atención médica preventiva o curativa.

Cuando el parto se produjere antes de iniciada la trigésimo tercera semana de gestación, o si el niño al nacer pesare menos de 1.500 gramos, el descanso postnatal del inciso primero del artículo 195 será de dieciocho semanas.

En caso de partos de dos o más niños, el período de descanso postnatal establecido en el inciso primero del artículo 195 se incrementará en siete días corridos por cada niño nacido a partir del segundo.

Cuando concurrieren simultáneamente las circunstancias establecidas en los incisos cuarto y quinto de este artículo, la duración del descanso postnatal será la de aquel que posea una mayor extensión.

Los certificados a que se refiere este artículo serán expedidos gratuitamente, cuando sean solicitados a médicos o matronas que por cualquier concepto perciban remuneraciones del Estado.

- 7 El artículo 197 bis, por su extensión, se inserta en el **ANEXO I**.

- 8 Art. 199. Cuando la salud de un niño menor de un año requiera de atención en el hogar con motivo de enfermedad grave, circunstancia que deberá ser acreditada mediante certificado médico otorgado o ratificado por los servicios que tengan a su cargo la atención médica de los menores, la madre trabajadora tendrá derecho al permiso y subsidio que establece el artículo anterior por el período que el respectivo servicio determine. En el caso que ambos padres sean trabajadores, cualquiera de ellos y a elección de la madre, podrá gozar del permiso y subsidio referidos. Con todo, gozará de ellos el padre, cuando la madre

Tendrá también derecho a este permiso y subsidio, la trabajadora o el trabajador que tenga a su cuidado un menor de edad inferior a un año, respecto de quien se le haya otorgado judicialmente la tuición o el cuidado personal como medida de protección. Este derecho se extenderá al cónyuge o conviviente civil, en los mismos términos señalados en el inciso anterior.

Si los beneficios precedentes fueren obtenidos en forma indebida, los trabajadores involucrados serán solidariamente responsables de la restitución de las prestaciones pecuniarias percibidas, sin perjuicio de las sanciones penales que por este hecho les pudiere corresponder.

- 9 Art. 199 bis. Cuando la salud de un niño o niña mayor de un año y menor de dieciocho años de edad requiera el cuidado personal de su padre o madre con motivo de un accidente grave o de una enfermedad grave, aguda y con riesgo de muerte, tanto el padre como la madre trabajadores tendrán derecho a un permiso para ausentarse de su trabajo por el número de horas equivalentes a diez jornadas ordinarias de trabajo al año, distribuidas a elección del trabajador o trabajadora en jornadas completas, parciales o combinación de ambas, las que se considerarán como trabajadas para todos los efectos legales. El accidente o la enfermedad deberán ser acreditados mediante certificado otorgado por el médico que tenga a su cargo la atención del niño o niña.

Si el padre y la madre son trabajadores podrán usar este permiso conjunta o separadamente.

Cuando el cuidado personal del niño o niña lo tenga un tercero distinto del padre o la madre, otorgado por resolución judicial, sólo éste podrá hacer uso del permiso, en los

Artículo 6°.- Monto del Beneficio. El Beneficio será mensual y su monto será de hasta 5,14 Unidades Tributarias Mensuales para el pago del establecimiento de educación parvularia, en adelante, el “Establecimiento”, que elija el trabajador, y su pago será procedente por cada niño menor de dos años que haga uso del Beneficio.

En caso que dicho pago deba realizarse a un establecimiento de educación parvularia financiados por la Junta Nacional de Jardines Infantiles vía transferencia de fondos, al monto indicado en el inciso anterior le será descontada la suma mensual correspondiente a la asignación regulada por el artículo 3°¹⁰ de la ley 20.905 y la correspondiente al programa de alimentación de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas.

mismos términos que el padre o la madre.

Cuando el o la cónyuge, el o la conviviente civil o el padre o la madre del trabajador o trabajadora estén desahuciados o en estado terminal, el trabajador o la trabajadora podrá ejercer el derecho establecido en el inciso primero de este artículo, debiendo acreditarse esta circunstancia mediante certificado médico.

El tiempo no trabajado deberá ser restituído por el trabajador o trabajadora mediante imputación a su próximo feriado anual o laborando horas extraordinarias o a través de cualquier forma que convengan libremente las partes. En estos casos se aplicará lo dispuesto en el inciso final del artículo 32. Sin embargo, tratándose de trabajadores regidos por estatutos que contemplen la concesión de días administrativos, en primer lugar, el trabajador deberá hacer uso de ellos, luego podrá imputar el tiempo que debe reponer a su próximo feriado anual o a días administrativos del año siguiente al uso del permiso a que se refiere este artículo o a horas extraordinarias.

Asimismo, el trabajador y el empleador podrán utilizar y convenir directamente los mecanismos señalados en el artículo 375 y 376 de este Código para restituir y compensar el tiempo no trabajado.

En el evento de no ser posible aplicar los mecanismos señalados en los incisos anteriores se podrá descontar el tiempo equivalente al permiso obtenido de las remuneraciones mensuales del trabajador, en forma de un día por mes, lo que podrá fraccionarse según sea el sistema de pago, o en forma íntegra si el trabajador cesare en su trabajo por cualquier causa.

Iguals derechos y mecanismos de restitución serán aplicables a los padres, a la persona que tenga su cuidado personal o sea cuidador en los términos establecidos en la letra d) del artículo 6° de la ley N° 20.422, de un menor con discapacidad, debidamente inscrito en el Registro Nacional de la Discapacidad, o siendo menor de seis años, con la determinación diagnóstica del médico tratante.

Lo dispuesto en el inciso precedente se aplicará, en iguales términos, tratándose de personas mayores de dieciocho años con discapacidad mental, por causa psíquica o intelectual, multidéficit, o bien, presenten dependencia severa.

La solicitud del permiso deberá formalizarse mediante cualquier medio escrito de comunicación interna de la empresa, ya sea físico o electrónico, acompañando el certificado médico correspondiente. Cumpliéndose los requisitos establecidos en este artículo, el empleador no podrá negarse a otorgar el permiso.

En todo caso, de la ausencia al trabajo se deberá dar aviso al empleador dentro de las 24 horas siguientes al ejercicio del derecho.

- 10 Artículo 3°.- Concédese, a partir del 1 de marzo de 2016, una asignación para el personal que se desempeña en las funciones de director, educador de párvulos, técnico de educación parvularia, administrativo y auxiliar en los establecimientos de educación parvularia financiados por la Junta Nacional de Jardines Infantiles vía transferencia de fondos.

Tendrá derecho a la asignación señalada en el inciso anterior el personal que cuente con un nombramiento o contrato de trabajo vigente con dichas entidades empleadoras de una antigüedad de, a lo menos, cuatro meses al momento de su pago. Este requisito se acreditará con copia de la respectiva resolución o contrato de trabajo, según corresponda. Además, la entidad empleadora deberá presentar un certificado en que conste que las cotizaciones previsionales del trabajador con derecho a la asignación se encuentran pagadas.

Esta asignación ascenderá a una cantidad equivalente a un porcentaje de la diferencia entre el parámetro remuneracional a que alude el inciso siguiente y la remuneración bruta mensualizada que le corresponda al trabajador. Si la remuneración antes indicada excede el parámetro remuneracional, este no tendrá derecho a la asignación. El reglamento determinará la forma de calcular la remuneración bruta mensualizada, para lo cual podrá considerar un promedio de remuneraciones. Asimismo, la determinación del monto de la asignación se realizará en proporción a la jornada laboral del trabajador, de la forma en que lo establezca el reglamento.

El parámetro remuneracional y el porcentaje de la asignación se fijarán anualmente mediante decreto supremo del Ministerio de Hacienda, el cual también será suscrito por el Ministro de Educación, y regirán para el período comprendido entre el mes de julio del año de su dictación y el mes de junio del año siguiente, pudiendo ser modificados mediante el mismo procedimiento. El referido parámetro tendrá en consideración la remuneración mensual bruta pagada por la Junta Nacional de Jardines Infantiles al personal de su dependencia que desempeña las funciones señaladas en el inciso primero, en los establecimientos que administra de manera directa. El parámetro podrá ser diferenciado de acuerdo a la función que desempeña el trabajador, la localidad del país en que presta sus servicios u otros elementos que determine el reglamento. Por otra parte, el porcentaje de la asignación podrá ser diferenciado según el tipo de función desempeñada.

Sin perjuicio de lo señalado en el inciso anterior, el decreto que se dicte para el año 2016 podrá establecer hasta dos períodos y porcentajes de asignación a ser aplicados durante dicho año, a partir del mes de marzo

La asignación será de cargo fiscal, se pagará mensualmente, tendrá el carácter de imponible y tributable y no servirá de base de cálculo de ninguna otra remuneración. La

Asimismo, el Beneficio incluirá el pago de una matrícula de hasta el mismo valor, por una sola vez en un año calendario, respecto de cada niño menor de dos años que haga uso del Beneficio, según corresponda.

Artículo 7°.- Pago del Beneficio. El monto del Beneficio será pagado directamente por la Sociedad Administradora al Establecimiento, en caso que el menor de dos años asista a:

- a) Establecimientos privados que no reciban financiamiento o aporte estatal;
- b) Establecimientos de educación parvularia financiados por la Junta Nacional de Jardines Infantiles vía transferencia de fondos, únicamente respecto del niño o niña menor de dos años hijo o hija de los Beneficiarios.

En el caso señalado en la letra a), la Sociedad Administradora deberá verificar, al momento del pago al Establecimiento, el monto que deba enterar considerando el precio de la mensualidad que este cobre por el menor causante del Beneficio, y las reglas establecidas en los artículos 5°, 6°, 7° y 8° de la presente ley. Asimismo, los establecimientos deberán informar periódicamente a la Sociedad Administradora el valor de las prestaciones de servicio de nivel sala cuna y la capacidad total para dicho nivel, en los plazos y la forma que determine una norma general de la Superintendencia.

A los establecimientos incluidos en el literal a), no les será aplicable lo dispuesto en el artículo 88 A)¹¹ de la ley N° 20.903.

asignación será pagada por el respectivo empleador, siendo de su entera responsabilidad su pago oportuno e íntegro. El Estado, por su parte, tendrá la responsabilidad de transferir a la entidad empleadora los recursos para el pago de la asignación.

La percepción de la asignación por parte del trabajador en ningún caso podrá significar que la remuneración pagada por la entidad empleadora disminuya de manera injustificada en comparación a la pagada por esta en el período anterior a dicha percepción, conforme a la determinación que de ello haga el reglamento.

El reglamento, que será dictado por el Ministerio de Educación y suscrito además por el Ministro de Hacienda, establecerá la forma de administrar la asignación; los mecanismos de rendición de cuentas que, a lo menos, deberán contemplar los convenios de transferencia de recursos para el pago de esta asignación por parte de los sostenedores, destinados para incrementar las remuneraciones de los trabajadores beneficiarios de ella; los medios que se utilizarán para verificar el cumplimiento del pago de la asignación por parte de las entidades empleadoras, y las sanciones en caso, de incumplimiento por parte de los empleadores en el uso de los recursos transferidos. Además, podrá establecer el monto máximo a que puede ascender la asignación, de acuerdo a la función y la localidad del país en que desarrolla sus labores el trabajador, así como toda otra norma necesaria para el otorgamiento y funcionamiento de la asignación de este artículo.

A la Junta Nacional de Jardines Infantiles le corresponderá la supervisión y control del correcto uso de los recursos destinados al pago de esta asignación, sin perjuicio de las facultades legales que correspondan a otros órganos.

El monto de los recursos que se destinarán al pago de esta asignación se determinará anualmente en la ley de Presupuestos del Sector Público.

11 Artículo 88 A.- El presente Título se aplicará a los profesionales de la educación que desempeñen alguna de las funciones señaladas en el artículo 5° de esta ley en establecimientos que impartan educación parvularia y que sean financiados con aportes regulares del Estado para su operación y funcionamiento. El establecimiento donde se desempeñan deberá, además, encontrarse reconocido oficialmente por el Estado.

Sin perjuicio de lo anterior, estos profesionales se regirán por las normas del Código del Trabajo y sus respectivas disposiciones complementarias en todo aquello que no esté expresamente establecido en este Título.

El presente Título no se aplicará a los profesionales de la educación que se desempeñen en establecimientos que imparten educación parvularia y que son subvencionados conforme al decreto con fuerza de ley N°2, de 1998, del Ministerio de Educación, ni a los que se desempeñen en establecimientos pertenecientes a la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

Artículo 8°.- Pago conforme a jornada laboral del trabajador. El trabajador dependiente cuya jornada sea igual o superior a quince horas e igual o menor a treinta horas semanales tendrá derecho al Beneficio por hasta un valor equivalente a los dos tercios del monto señalado en el artículo 6° de la presente ley.

En el caso del trabajador cuya jornada sea menor a quince horas semanales no tendrá derecho a acceder al Beneficio. Con todo, en el caso que el trabajador tenga dos o más contratos de trabajo en régimen de jornada parcial, podrá tener derecho al Beneficio si la suma de todas las jornadas de trabajo establecidas en los respectivos contratos cumple con el mínimo establecido en el inciso anterior y con los demás requisitos establecidos en la presente ley.

Aquel trabajador excluido del cumplimiento de jornada laboral de conformidad a los incisos segundo, tercero, cuarto y quinto del artículo 22°¹² del Código del Trabajo, tendrá derecho a la totalidad del monto establecido en el artículo 6° de la presente ley.

Artículo 9°.- Autorización de funcionamiento o reconocimiento oficial del Estado. El establecimiento que elija el trabajador deberá cumplir, de acuerdo a la normativa vigente, con la obligación de autorización de funcionamiento o reconocimiento oficial del Estado, incluido aquellos establecimientos que tenga el empleador.

Para estos efectos, la Sociedad Administradora deberá publicar un listado de las entidades autorizadas para recibir el Beneficio, considerando la información del registro establecido en el artículo 12° de la presente ley y en las formas y plazos que determine la Superintendencia de Pensiones por una norma de carácter general.

Artículo 10.- Procedimiento de Solicitud del Beneficio. Para acceder al Beneficio el trabajador deberá solicitarlo ante la Sociedad Administradora, mediante el formulario que para tales efectos ésta proveerá, el que deberá estar disponible a través de medios electrónicos.

12 Quedarán excluidos de la limitación de jornada de trabajo los trabajadores que presten servicios a distintos empleadores; los gerentes, administradores, apoderados con facultades de administración y todos aquellos que trabajen sin fiscalización superior inmediata; los contratados de acuerdo con este Código para prestar servicios en su propio hogar o en un lugar libremente elegido por ellos; los agentes comisionistas y de seguros, vendedores viajantes, cobradores y demás similares que no ejerzan sus funciones en el local del establecimiento.

También quedarán excluidos de la limitación de jornada de trabajo los trabajadores que se desempeñen a bordo de naves pesqueras.

Asimismo, quedan excluidos de la limitación de jornada, los trabajadores contratados para que presten sus servicios preferentemente fuera del lugar o sitio de funcionamiento de la empresa, mediante la utilización de medios informáticos o de telecomunicaciones.

La jornada de trabajo de los deportistas profesionales y de los trabajadores que desempeñan actividades conexas se organizará por el cuerpo técnico y la entidad deportiva profesional correspondiente, de acuerdo a la naturaleza de la actividad deportiva y a límites compatibles con la salud de los deportistas, y no les será aplicable lo establecido en el inciso primero de este artículo.

Para estos efectos, se deberá acompañar a la solicitud los siguientes documentos:

- a) Certificado de nacimiento del niño o niña;
- b) En el caso del literal b) del artículo 2° de esta ley, copia autorizada de la sentencia judicial, escritura pública, acta extendida ante oficial de Registro Civil, que haya conferido el cuidado personal, o, en caso de fallecimiento de la madre, copia del certificado de defunción de ésta;
- c) En el caso del literal c) del artículo 2° de esta ley, copia autorizada de la sentencia judicial que haya conferido el cuidado personal del niño o niña;
- d) En caso de trabajadores dependientes, copia del o los contratos de trabajo vigentes;
- e) En caso de trabajadores independientes, certificado de afiliación previsional y certificado de las cotizaciones previsionales;
- f) En el caso que el padre solicite el Beneficio de acuerdo a lo señalado en el inciso segundo del artículo 2° de la presente ley, un poder notarial con la autorización correspondiente junto con el resto de los antecedentes que se exigen para acreditar la calidad de beneficiaria de la madre de acuerdo a la presente ley. En caso de desacuerdo entre los padres sobre la procedencia de solicitar o no el Beneficio, se estará a la opinión de la madre;
- g) Copia de las comunicaciones a que refiere el artículo 197 bis inciso 913 del Código del Trabajo, en caso de ser ello procedente.

La Sociedad Administradora deberá verificar que el solicitante cumple con los requisitos para acceder al Beneficio, y deberá comunicar al interesado si se aprueba o se rechaza la solicitud, dentro del plazo de 10 días hábiles desde la fecha de presentación de la misma.

En caso de rechazo, el trabajador podrá volver a solicitar el Beneficio, sin perjuicio de su derecho a presentar un reclamo ante la Superintendencia.

Mientras una solicitud de acceso al Beneficio se encuentre pendiente, no se admitirá otra respecto del mismo niño.

La Superintendencia establecerá mediante una norma de carácter general el procedimiento de solicitud, pago, suspensión, y reclamo del Beneficio de acuerdo a la presente ley.

13 En caso de que el padre haga uso del permiso postnatal parental, deberá dar aviso a su empleador mediante carta certificada enviada, a lo menos, con diez días de anticipación a la fecha en que hará uso del mencionado permiso, con copia a la Inspección del Trabajo. Copia de dicha comunicación deberá ser remitida, dentro del mismo plazo, al empleador de la trabajadora. A su vez, el empleador del padre deberá dar aviso a las entidades pagadoras del subsidio que correspondan, antes del inicio del permiso postnatal parental que aquél utilice.

Artículo 11.- Devengo de las prestaciones del Beneficio. Las prestaciones del Beneficio se devengarán desde la fecha de aceptación de la solicitud, siempre y cuando el niño o niña ya esté asistiendo a un establecimiento.

Si a la fecha de aceptación de la solicitud no se encontrare el niño o niña asistiendo a un establecimiento, el Beneficio se devengará a contar de la fecha en que comience a asistir.

Artículo 12.- Registro de establecimientos y registro de asistencia. El Ministerio de Educación deberá remitir a la Sociedad Administradora los registros actualizados establecidos en la ley N° 20.83214 y en el decreto con fuerza de ley N° 215 del año 2009, del Ministerio de Educación, incorporando la siguiente información:

- 1° Razón social del Establecimiento;
- 2° Rol Único Tributario del Establecimiento;
- 3° Domicilio del Establecimiento con indicación de la localidad y comuna donde se emplaza.

Este registro deberá actualizarse mensualmente y ponerse a disposición de la Sociedad Administradora, electrónicamente, dentro de los primeros 5 días hábiles de cada mes.

Asimismo, los establecimientos referidos en el artículo 7, deberán informar a la Sociedad Administradora la asistencia diaria de los menores causantes de las prestaciones del Beneficio, en los plazos y la forma que determine una norma de carácter general de la Superintendencia de Educación.

14 Crea la autorización de funcionamiento de establecimientos de educación parvularia.

15 Fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N°20.370 con las normas no derogadas del decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005.

Párrafo 3°

De la Suspensión y Extinción de las Prestaciones del Beneficio

Artículo 13.- Suspensión del Beneficio. Si el niño registra una asistencia menor al 50% en un período de sesenta días corridos, se suspenderá el pago del Beneficio, lo que deberá ser notificado por la Sociedad Administradora al beneficiario y al Establecimiento.

El beneficiario podrá reactivar el Beneficio a partir del primer día hábil del mes siguiente a la fecha de la suspensión. La reactivación podrá solicitarse hasta por una vez en un año calendario. En caso de una segunda suspensión dentro del mismo año calendario, no podrá solicitarse nuevamente el Beneficio en ese período.

Durante la suspensión del Beneficio no se devengarán pagos y no existirá la posibilidad de recuperarlos posteriormente.

Para los efectos del cómputo de asistencia señalado en el inciso primero, no se considerarán aquellas ausencias que estén justificadas mediante certificado médico respecto del niño o niña, o bien cuando el menor esté temporalmente impedido de asistir al establecimiento en razón del uso del feriado legal del trabajador beneficiario, o cuando éste goce de licencia médica, o cualquier otra causa grave que no sea imputable al trabajador. Lo anterior deberá ser acreditado por el Establecimiento ante la Sociedad Administradora, acompañando los documentos fundantes de la causal de justificación.

Artículo 14.- Extinción del Beneficio. El derecho a percibir el Beneficio se extinguirá por cualquiera de las siguientes causales:

- a) Por el fallecimiento del niño o niña causante del Beneficio;
- b) Por la pérdida de la calidad de beneficiario;
- c) Por el cumplimiento del plazo del Beneficio, hasta el último día del mes en que el niño o niña cumpla dos años de edad;
- d) Por el uso indebido del Beneficio de acuerdo a lo señalado en el artículo 48° de la presente ley.

Una norma de carácter general dictada por la Superintendencia establecerá las modalidades y oportunidades de acreditación de las causales de extinción del Beneficio.

Párrafo 4°

Del Financiamiento del Fondo Solidario del Beneficio Social de Educación Parvularia en Nivel de Sala Cuna

Artículo 15.- Fondo del Beneficio. Créase el Fondo del Beneficio Social de Educación Parvularia en Nivel de Sala Cuna, en adelante, el “Fondo”, el cual financiará las prestaciones del Beneficio. Este Fondo tendrá un patrimonio independiente y separado del patrimonio de la Sociedad Administradora, y sin que dicha sociedad tenga dominio sobre éste.

Artículo 16.- Financiamiento del Fondo. El Fondo se financiará con los siguientes recursos:

- a) Con una cotización de un 0,1%, calculado sobre las remuneraciones imponibles de los trabajadores dependientes, de cargo del empleador o la entidad pagadora de subsidios, y sobre las rentas imponibles de los trabajadores independientes;
- b) Con un aporte del Estado que ascenderá anualmente a un total de 225.792 unidades tributarias mensuales, las que se enterarán al Fondo en 12 cuotas mensuales de 18.816 unidades tributarias mensuales;
- c) Con el producto de las multas, reajustes e intereses que se apliquen en conformidad a la ley N° 17.322¹⁶;
- d) Con la rentabilidad que genere la inversión de los recursos del Fondo que administre la Sociedad Administradora; y
- e) Con los reintegros que procedan en conformidad al inciso segundo del artículo 49° de la presente ley.

Con todo, en caso de ser insuficientes los recursos del Fondo para financiar las prestaciones del Beneficio, será de cargo fiscal completar la diferencia para llegar a los montos de cobertura establecidos en la presente ley.

Artículo 17.- Modificación Legal. Cada vez que se proponga una modificación legal al Beneficio, a sus condiciones de acceso o a cualquier variable que afecte los ingresos o gastos esperados del Fondo,

16 Normas para la cobranza judicial de cotizaciones, aportes y multas de las instituciones de seguridad social.

la Superintendencia y la Dirección de Presupuestos deberán realizar un estudio actuarial que permita evaluar la sustentabilidad del Fondo con las modificaciones propuestas.

Dicho estudio deberá a lo menos considerar un análisis sobre el efecto de la modificación en los ingresos y gastos del Fondo. Los resultados del estudio actuarial deberán ser públicos.

Artículo 18.- Cotización. Los empleadores estarán obligados a enterar la referida cotización, dentro de los plazos legales, respecto de todos sus trabajadores dependientes, sin perjuicio del tipo o de la modalidad contractual que los vincule. Los trabajadores independientes para obtener el Beneficio deberán cotizar en conjunto con el resto de las cotizaciones previsionales establecidas por ley y por toda la base imponible, considerando un mínimo de cuatro ingresos mínimos mensuales y el tope máximo equivalente de acuerdo a lo dispuesto en el inciso siguiente.

Las cotizaciones se calcularán sobre las remuneraciones y rentas imponibles hasta el tope máximo equivalente de acuerdo a lo establecido en el artículo 16¹⁷ y 90¹⁸ del decreto ley N° 3.500, de 1980, según corresponda.

17 Artículo 16.- La remuneración y renta mensual tendrán un límite máximo imponible de sesenta unidades de fomento reajustadas considerando la variación del índice de remuneraciones reales determinadas por el Instituto Nacional de Estadísticas entre noviembre del año anteprecedente y noviembre del precedente, respecto del año en que comenzará a aplicarse, sin perjuicio de lo establecido en el inciso segundo del artículo 90.

El tope imponible así reajustado, comenzará a regir el primer día de cada año y será determinado mediante resolución de la Superintendencia de Pensiones.

Con todo, el tope imponible será reajustado siempre que la variación del Índice antes mencionada sea positiva. Si fuese negativa, el tope mantendrá su valor vigente en unidades de fomento y sólo se reajustará en la oportunidad en que se produzca una variación positiva que corresponda por aplicación del inciso primero.

Si un trabajador percibe simultáneamente remuneraciones de dos o más empleadores o, todas las remuneraciones se sumarán para los efectos señalados en el inciso anterior, debiendo la Superintendencia determinar la forma en que se efectúen y enteren las cotizaciones que señala la ley. En todo caso, aquella parte de la cotización adicional destinada al financiamiento del seguro a que se refiere el artículo 59, deberá ser pagada por cada uno de los empleadores, de manera proporcional al monto que éstos paguen por concepto de remuneraciones imponibles al respectivo trabajador, sobre el total de dichas remuneraciones.

Los trabajadores del sector público afiliados al Sistema podrán optar, en forma definitiva mientras permanezcan en el mismo empleo, porque tengan el carácter de imponibles las asignaciones que no tienen dicha calidad, con excepción de aquellas que el Código del Trabajo declara que no constituyen remuneraciones. La mayor imponibilidad se considerará sólo para los efectos de esta ley.

Todas las referencias sobre remuneración y renta mensual imponible máxima se entenderán ajustadas al monto que se determine en función del procedimiento indicado en este artículo.

18 Artículo 90.- La renta imponible será anual y corresponderá al 80% del conjunto de rentas brutas gravadas por el artículo 42, N°2, de la Ley sobre Impuesto a la Renta, obtenida por el afiliado independiente en el año calendario anterior a la declaración de dicho impuesto, la que no podrá ser inferior a un ingreso mínimo mensual, ni superior al producto de multiplicar 12 por el límite máximo imponible establecido en el inciso primero del artículo 16, para lo cual la unidad de fomento corresponderá a la del último día del mes de diciembre.

Si un trabajador percibe simultáneamente rentas del inciso anterior y remuneraciones de uno o más empleadores, todas las remuneraciones imponibles y rentas imponibles del inciso anterior, se sumarán para los efectos de aplicar el límite máximo anual establecido en el inciso precedente, de acuerdo a lo que determine una norma de carácter general de la Superintendencia.

Los trabajadores independientes que no perciban rentas de las señaladas en el inciso primero podrán cotizar conforme a lo establecido en el Párrafo 2° de este Título IX. No obstante, las cotizaciones de pensiones y salud efectuadas por estos trabajadores independientes, tendrán el carácter de cotizaciones previsionales para los efectos de la Ley sobre Impuesto a la Renta.

Se entenderá por "año calendario" el período de doce meses que termina el 31 de diciembre.

Para todos los efectos legales, estas cotizaciones tendrán el carácter de previsionales.

Artículo 19.- Pago de las cotizaciones. Las cotizaciones deberán ser enteradas a la Sociedad Administradora por el empleador, el trabajador independiente o la entidad pagadora de subsidios, según sea el caso, en las formas y oportunidades establecidas en el artículo 19°¹⁹ del decreto ley N° 3.500, de 1980.

Las prestaciones del Beneficio se mantendrán hasta el último día del mes siguiente respecto del cual se enteraron o pagaron las cotizaciones previsionales, según sea el caso.

Artículo 20.- Efecto del no pago de las cotizaciones. Si el empleador o la entidad pagadora de subsidios, en su caso, no pagare oportunamente la cotización a la Sociedad Administradora, dicho atraso no impedirá que el trabajador dependiente acceda o mantenga el Beneficio, sin perjuicio de la obligación de la Sociedad Administradora de perseguir el pago de las sumas adeudadas, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 19° del decreto ley N° 3.500 de 1980.

Artículo 21.- Inversión Recursos del Fondo. Los recursos del Fondo se invertirán en los instrumentos financieros señalados en las letras a); b); c); d); e); i); fondos mutuos nacionales regidos por la ley N°20.712, todas del artículo 45°²⁰ del decreto ley N° 3.500, de 1980.

19 El artículo 19, por su extensión, se inserta en el **ANEXO II**.

20 Artículo 45.- Las inversiones que se efectúen con recursos de un Fondo de Pensiones tendrán como únicos objetivos la obtención de una adecuada rentabilidad y seguridad. Todo otro objetivo que se pretenda dar a tales inversiones se considerará contrario a los intereses de los afiliados y constituirá un incumplimiento grave de las obligaciones de las Administradoras.

Los recursos del Fondo de Pensiones, sin perjuicio de los depósitos en cuenta corriente a que se refiere el artículo 46, deberán ser invertidos en:

- a) Títulos emitidos por la Tesorería General de la República o por el Banco Central de Chile; letras de crédito emitidas por los Servicios Regionales y Metropolitano de Vivienda y Urbanización; Bonos de Reconocimiento emitidos por el Instituto de Normalización Previsional u otras Instituciones de Previsión, y otros títulos emitidos o garantizados por el Estado de Chile;
- b) Depósitos a plazo; bonos, y otros títulos representativos de captaciones, emitidos por instituciones financieras;
- c) Títulos garantizados por instituciones financieras;
- d) Letras de crédito emitidas por instituciones financieras;
- e) Bonos de empresas públicas y privadas;
- i) Efectos de comercio emitidos por empresas públicas y privadas;

Los bienes y derechos que componen el patrimonio de este Fondo serán inembargables y estarán destinados sólo a generar prestaciones de acuerdo a las disposiciones de la presente ley.

Las normas que establezcan los criterios de elegibilidad de emisores y diversificación, entre otros aspectos relevantes para la administración financiera del Fondo, tales como, mercados autorizados, prohibiciones, conflictos de intereses, custodia, políticas de inversión, valoración estarán contenidas en un Régimen de Inversión, propuesto por la Superintendencia, aprobado por el Consejo Técnico de Inversiones a que se refiere el decreto ley N° 3.500, de 1980, y autorizado por el Ministerio de Hacienda.

Las inversiones que se efectúen con recursos del Fondo tendrán como único objetivo la obtención de una adecuada rentabilidad y seguridad, que permita el otorgamiento del Beneficio establecido en el Título I de esta ley.

Párrafo 5°

De la Administración del Beneficio Social de Educación Parvularia en Nivel de Sala Cuna y del Fondo

Artículo 22.- Administración del Beneficio y del Fondo. La administración del Beneficio y del Fondo estará a cargo de una sociedad anónima constituida en Chile o agencia de una extranjera constituida en Chile, de giro único, que tendrá como objeto exclusivo administrar el Fondo, y otorgar y administrar las prestaciones del Beneficio que establece esta ley, la que se denominará "Sociedad Administradora".

Los accionistas de la Sociedad Administradora no podrán haber sido condenados por los delitos contemplados en la ley N°20.393²¹.

Artículo 23.- Obligaciones de la Sociedad Administradora. La Sociedad Administradora deberá prestar los siguientes servicios:

- a) La recaudación de las cotizaciones establecidas en esta ley;

²¹ Establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho

- b) La administración del Fondo y la inversión de los recursos acumulados en el mismo;
- c) La administración, otorgamiento y pago del Beneficio establecido en los artículos 7°, 8° y 10° de la presente ley.

Artículo 24.- Duración de la Sociedad Administradora. La Sociedad Administradora será de duración indefinida y su administración subsistirá hasta el cumplimiento del plazo de vigencia del contrato de administración, el que será fijado en las respectivas bases de licitación a las que alude el Párrafo 6° de la presente ley, no pudiendo ser superior a diez años.

En caso que se disuelva, se aplicará lo dispuesto en los artículos 109 y siguientes de la ley N° 18.046²². Con todo, para dar término al proceso de liquidación de la Sociedad Administradora, se requerirá la aprobación de la cuenta de la liquidación por la Superintendencia.

Artículo 25.- Retribución Sociedad Administradora. La Sociedad Administradora tendrá derecho a una retribución, de cargo del Fondo. La retribución y su base de cálculo se determinarán en el contrato de prestación del servicio de administración. La retribución estará exenta del Impuesto al Valor Agregado, establecido en el Título II del decreto ley N° 825, de 1974.

Artículo 26.- Enajenación de la Sociedad Administradora. Cuando una enajenación de acciones de la Sociedad Administradora a un tercero o a un accionista minoritario, alcance por sí sola o sumada a las que aquél ya posea, más del 10% de las acciones de la mencionada sociedad, el adquirente deberá requerir autorización a los Ministerios del Trabajo y Previsión Social y de Hacienda. El adquirente, en todo caso deberá ajustarse a lo previsto en el inciso segundo del artículo 22 de la presente ley.

La autorización podrá ser denegada por resolución fundada en la capacidad de la Sociedad Administradora para continuar prestando los servicios estipulados en el contrato de administración.

Artículo 27.- Continuidad Prestación del Servicio. Durante la vigencia del contrato, la Sociedad Administradora deberá asegurar la continuidad de la prestación del servicio de administración en condiciones de absoluta normalidad y en forma ininterrumpida. El incumplimiento de esta obligación

22 Ley sobre sociedades anónimas.

constituirá infracción grave de las obligaciones de la Sociedad Administradora de acuerdo a lo establecido en la literal b) del artículo 48° de la presente ley.

Artículo 28.- La cotización constituye gastos y no es constitutiva de renta. La cotización establecida en el artículo 16 letra a) de la presente ley quedará comprendida en el N° 6 del artículo 31 del decreto ley N° 824²³, de 1974.

Los incrementos que experimente el Fondo, por pago de cotizaciones, así como el Beneficio, no constituirán renta para los efectos del decreto ley N° 824, de 1974.

Artículo 29.- Información Suficiente. La Sociedad Administradora deberá proporcionar al público en general, información suficiente, fidedigna y oportuna, respecto de su situación institucional, económica y financiera y de la gestión del Beneficio que administra, como asimismo de sus sociedades u organismos filiales o relacionados, según establezca la Superintendencia en una norma de carácter general.

Artículo 30.- Capital Mínimo. El capital mínimo necesario para la formación de la Sociedad Administradora será el equivalente a 5.000 U.F (cinco mil unidades de fomento), el que deberá enterarse en dinero efectivo y encontrarse suscrito y pagado al tiempo de otorgarse la escritura social. Además, la referida sociedad deberá mantener permanentemente un patrimonio al menos igual al capital mínimo exigido. Si el patrimonio se redujere de hecho a una cantidad inferior al mínimo exigido, ella estará obligada, cada vez que esto ocurra, a completarlo dentro de un plazo de seis meses. Si así no lo hiciere se declarará la infracción grave de las obligaciones que le impone la ley, de acuerdo a lo establecido en la literal a) del artículo 48° de la presente ley.

23 6°.- Sueldos, salarios y otras remuneraciones pagados o adeudados por la prestación de servicios personales, incluso las gratificaciones legales y contractuales, y asimismo, toda cantidad por concepto de gastos de representación. Las participaciones y gratificaciones voluntarias que se otorguen a los trabajadores se aceptarán como gasto cuando se paguen o abonen en cuenta y siempre que ellas sean repartidas a cada trabajador en proporción a los sueldos y salarios pagados durante el ejercicio, así como en relación a la antigüedad, cargas de familia u otras normas de carácter general y uniforme aplicables a todos los trabajadores de la empresa.

Tratándose de personas que por cualquiera circunstancia personal o por la importancia de su haber en la empresa, cualquiera sea la condición jurídica de ésta, hayan podido influir, a juicio de la Dirección Regional, en la fijación de sus remuneraciones, éstas sólo se aceptarán como gasto en la parte que, según el Servicio, sean razonablemente proporcionadas a la importancia de la empresa, a las rentas declaradas, a los servicios prestados y a la rentabilidad del capital, sin perjuicio de los impuestos que procedan respecto de quienes perciban tales pagos.

No obstante, se aceptará como gasto la remuneración del socio de sociedades de personas y socio gestor de sociedades en comandita por acciones, y las que se asigne el empresario individual, que efectiva y permanentemente trabajen en el negocio o empresa, hasta por el monto que hubiera estado afecto a cotizaciones previsionales obligatorias. En todo caso dichas remuneraciones se considerarán rentas del artículo 42, número 1.

Las remuneraciones por servicios prestados en el extranjero se aceptarán también como gastos, siempre que se acrediten con documentos fehacientes y sean a juicio de la Dirección Regional, por su monto y naturaleza, necesarias y convenientes para producir la renta en Chile.

Las inversiones y acreencias en empresas que sean personas relacionadas, de acuerdo al artículo 100 de la ley N°18.045²⁴, a la Sociedad Administradora se excluirán del cálculo del patrimonio mínimo exigido a ésta.

Artículo 31.- Patrimonio y Estados Financieros de la Sociedad Administradora. La Sociedad Administradora deberá llevar contabilidad separada de su patrimonio propio y del Fondo.

Corresponderá a la Superintendencia examinar, calificar y observar los estados financieros de la Sociedad Administradora, incluyendo el Fondo, los que, según una norma de carácter general que establezca dicha Superintendencia, deberán presentarse debidamente auditados por auditores externos inscritos en el registro de empresas de auditoría externa de la Comisión para el Mercado Financiero.

La Superintendencia, mediante una norma de carácter general, establecerá la forma y requisitos para la entrega de dicha información.

Artículo 32.- Infracciones graves y Administración Provisional. La declaración de infracción grave de las obligaciones de la Sociedad Administradora o de insolvencia corresponderá a la Superintendencia y deberá estar fundada en alguna de las causales establecidas en esta ley de acuerdo a lo dispuesto en el Párrafo 8°, en la ley N° 18.046, en el decreto ley N° 3.500, de 1980, en las Bases de Licitación o en el contrato de administración del Beneficio.

24 Artículo 100.- Son relacionadas con una sociedad las siguientes personas:

- a) Las entidades del grupo empresarial al que pertenece la sociedad;
- b) Las personas jurídicas que tengan, respecto de la sociedad, la calidad de matriz, coligante, filial o coligada, en conformidad a las definiciones contenidas en la ley N° 18.046;
- c) Quienes sean directores, gerentes, administradores, ejecutivos principales o liquidadores de la sociedad, y sus cónyuges o sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad, así como toda entidad controlada, directamente o a través de otras personas, por cualquiera de ellos, y
- d) Toda persona que, por sí sola o con otras con que tenga acuerdo de actuación conjunta, pueda designar al menos un miembro de la administración de la sociedad o controle un 10% o más del capital o del capital con derecho a voto si se tratare de una sociedad por acciones.

La Superintendencia podrá establecer mediante norma de carácter general, que es relacionada a una sociedad toda persona natural o jurídica que por relaciones patrimoniales, de administración, de parentesco, de responsabilidad o de subordinación, haga presumir que:

- 1.- Por sí sola, o con otras con quienes tenga acuerdo de actuación conjunta, tiene poder de voto suficiente para influir en la gestión de la sociedad;
- 2.- Sus negocios con la sociedad originan conflictos de interés;
- 3.- Su gestión es influenciada por la sociedad, si se trata de una persona jurídica, o
- 4.- Si por su cargo o posición está en situación de disponer de información de la sociedad y de sus negocios, que no haya sido divulgada públicamente al mercado, y que sea capaz de influir en la cotización de los valores de la sociedad.

No se considerará relacionada a la sociedad una persona por el sólo hecho de participar hasta en un 5% del capital o 5% del capital con derecho a voto si se tratare de una sociedad por acciones, o si sólo es empleado no directivo de esa sociedad.

Los Ministerios del Trabajo y Previsión Social y de Hacienda, deberán llamar a licitación pública en el plazo de noventa días, contados desde la declaración de la infracción grave o la insolvencia, con el objeto de seleccionar a una nueva sociedad administradora.

Producida alguna de las situaciones a que hace referencia el inciso primero, cesará la administración ordinaria de la Sociedad y la Superintendencia nombrará un Administrador Provisional, el que tendrá todas las facultades del giro ordinario que la ley y la que los estatutos le señalen al directorio, o a quien haga sus veces, y al gerente. Dicho Administrador tendrá los deberes y estará sujeto a las responsabilidades que establece la ley N°18.046. La Administración Provisional durará hasta el inicio de operaciones de la nueva sociedad administradora.

Adjudicado el nuevo contrato de administración del Beneficio, el Administrador Provisional efectuará el traspaso de la administración del Fondo y de todos los registros del Beneficio, concluido lo cual la Sociedad Administradora insolvente o incumplidora deberá entrar en proceso de liquidación. La liquidación de la Sociedad Administradora será practicada por la Superintendencia.

Párrafo 6°

De la Licitación de la Administración del Beneficio y del Fondo Beneficio Social en Nivel de Sala Cuna

Artículo 33.- Licitación Pública. El servicio de administración del Beneficio y su Fondo será adjudicado mediante una licitación pública.

La licitación y la adjudicación de la administración del Beneficio y su Fondo se regirán por las normas que establezca esta ley y las respectivas bases de licitación, las que serán elaboradas por la Superintendencia y aprobadas por Decreto Supremo del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, y suscrito además por el Ministro de Hacienda, para cada contrato en particular. Dichas Bases se entenderán incorporadas a los respectivos contratos.

Las bases de licitación deberán, a lo menos, especificar las condiciones objetivas que serán consideradas para determinarla, la forma de cálculo de la retribución a la Sociedad Administradora, la información técnica y comercial que deberán entregar los participantes, los requisitos técnicos y financieros que deberán cumplir los oferentes, los plazos, las garantías, la descripción del desarrollo del proceso y de las condiciones de adjudicación. Asimismo, las bases deberán contener garantías de ejecución y operación del servicio y las multas por atraso en la entrada en operación del servicio en las condiciones y plazos establecidos.

Corresponderá al Ministerio del Trabajo y Previsión Social efectuar la licitación pública de acuerdo con las bases de licitación aprobadas y en consideración de los principios de libre concurrencia de los oferentes y de igualdad ante las bases.

Artículo 34.- Postulantes Licitación Pública. Podrán postular a la licitación señalada en el artículo anterior, concurrir a la constitución de la Sociedad Administradora y prestar los servicios propios de su giro, las Cajas de Compensación de Asignación Familiar, las Administradoras Generales de Fondos fiscalizados por la Comisión para el Mercado Financiero, las entidades bancarias fiscalizadas por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, las Compañías de Seguros, las Administradoras de Fondos de Pensiones, la Administradora del Fondo de Cesantía y demás personas jurídicas, nacionales o extranjeras que cumplan con lo establecido en las bases de licitación.

Las entidades antes mencionadas podrán compartir su personal e infraestructura con la Sociedad Administradora.

Si no hubiere interesados en la licitación o ésta fuere declarada desierta, deberá llamarse, dentro del plazo de noventa días, a una nueva licitación pública. Dicho plazo se contará desde la fecha del decreto que declara desierta la licitación. Si se declara desierta por segunda vez se procederá de acuerdo a lo establecido en el inciso final del artículo 9°²⁵ del decreto con fuerza de ley N° 1 de 2001, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575.

Artículo 35.- Adjudicación Licitación. La adjudicación se efectuará mediante decreto dictado por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, bajo la fórmula “Por Orden del Presidente de la República”, suscrito también por el Ministro de Hacienda, el que será publicado en el Diario Oficial.

Una vez adjudicada la licitación de la administración del Beneficio y su Fondo, el adjudicatario quedará obligado a constituir, en el plazo de sesenta días, contado desde la publicación en el Diario Oficial del decreto mencionado en el inciso anterior, y con los requisitos que esta ley y las bases de licitación establezcan, la sociedad constituida en Chile o agencia de una extranjera constituida en Chile, con quien se celebrará el contrato de administración del Beneficio y cuyo objeto será el mencionado en el artículo 22° de la presente ley.

El inicio de las operaciones de la Sociedad Administradora deberá ser autorizado por la Superintendencia, previa constatación que aquélla se ajusta a la calificación técnica aprobada.

25 La licitación privada procederá, en su caso, previa resolución fundada que así lo disponga, salvo que por la naturaleza de la negociación corresponda acudir al trato directo.

Párrafo 7°

De las Bases de Datos y del Tratamiento de la Información

Artículo 36.- Base de Datos. La Sociedad Administradora deberá mantener una Base de Datos de los trabajadores sujetos al Beneficio, con los registros necesarios para la operación de éste, el que incluirá el registro general de información de los empleadores o trabajadores cotizantes y de los trabajadores por los cuales se efectúa la respectiva cotización, de los trabajadores beneficiarios, de los menores causantes de los beneficios, de los establecimientos, del otorgamiento, suspensión y extinción del Beneficio, y el archivo de documentos.

Artículo 37.- Norma de Carácter General de Tratamiento de Datos. La Sociedad Administradora tendrá la responsabilidad de efectuar el tratamiento de la Base de Datos, sólo para cumplir las funciones definidas en la ley y aquellas que establezca la Superintendencia mediante una norma de carácter general, de acuerdo con lo establecido en la ley N° 19.628²⁶.

Artículo 38.- Tratamiento de datos. Para efectos de esta ley, se entenderá por tratamiento de datos lo establecido en el literal o) de la ley N° 19.628²⁷.

Artículo 39.- Objeto Base de Datos. La Base de Datos tendrá como objeto único servir de soporte a las funciones de la Sociedad Administradora, responder a las solicitudes y reclamos de los trabajadores usuarios del Beneficio, contestar a los requerimientos de fiscalización y la realización de estudios de carácter técnico.

Artículo 40.- Información Base de Datos. La Base de Datos estará compuesta además con la información que sea necesaria para el cumplimiento de las funciones de la Sociedad Administradora que deberán proporcionar, en la forma y periodicidad que determine la Superintendencia por una norma de

26 Sobre protección de la vida privada.

27 Se refiere al artículo 2°: Para los efectos de esta ley se entenderá por:

o) Tratamiento de datos, cualquier operación o complejo de operaciones o procedimientos técnicos, de carácter automatizado o no, que permitan recolectar, almacenar, grabar, organizar, elaborar, seleccionar, extraer, confrontar, interconectar, disociar, comunicar, ceder, transferir, transmitir o cancelar datos de carácter personal, o utilizarlos en cualquier otra forma.

carácter general, el Administrador del Fondo de Cesantía, las Administradoras de Fondos de Pensiones, el Servicio de Registro Civil e Identificación, la Superintendencia de Salud, el Fondo Nacional de Salud, la Superintendencia de Educación, la Dirección del Trabajo, el Ministerio de Educación y el Ministerio del Trabajo y de Previsión Social, organismos que estarán obligados a entregar los antecedentes requeridos, y, en caso de no contar con ellos o no cumplir con su remisión dentro de los plazos fijados, deberán informar por escrito las razones e indicar el término en que lo harán.

Adicionalmente, la Superintendencia podrá requerir la información de que disponga el Sistema de Información de Datos Previsionales administrado por el Instituto de Previsión Social, como también la información que otras entidades públicas o privadas tengan en su poder y resulte necesaria para la integración del Beneficio y el cumplimiento de su objetivo.

Artículo 41.- Norma de Carácter General de control y resguardo de la Base de Datos.

La Superintendencia, mediante una norma de carácter general, establecerá los mecanismos necesarios para garantizar el control y resguardo de la Base de Datos, de acuerdo a lo dispuesto en la ley N° 19.628, la que será de responsabilidad exclusiva de la Sociedad Administradora.

Artículo 42.- Continuidad de la Base de Datos. Terminado el contrato de administración por cualquier causa, la Sociedad Administradora que estuviere prestando el servicio, deberá transferir a la nueva sociedad administradora la Base de Datos que permita la continuidad del funcionamiento del Beneficio.

La Sociedad Administradora que durante el traspaso de la concesión provoque un daño no fortuito a la Base de Datos que mantenga, o niegue u obstaculice su entrega o la otorgue en forma incompleta, será sancionada de conformidad con lo dispuesto en el decreto con fuerza de ley N° 101, de 1980²⁸, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

Artículo 43.- Privacidad de los datos personales y sensibles. Solamente la Sociedad Administradora y la Superintendencia podrán realizar el tratamiento de la información contenida en la Base de Datos, debiendo velar por la privacidad de los datos personales y sensibles contenidos en ella.

El que, durante el período de vigencia del contrato de administración o con posterioridad a él, haga uso de la información incluida en la Base de Datos que mantenga la Sociedad Administradora para un fin distinto al establecido en esta ley, será sancionado con las penas de presidio menor en cualquiera de sus grados,

28 Establece el estatuto orgánico de la superintendencia de administradoras de fondos de pensiones, su organización y atribuciones.

sin perjuicio de las sanciones administrativas que procedan de conformidad con lo dispuesto en el decreto con fuerza de ley N° 101, de 1980, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

Artículo 44.- Causales de secreto o reserva. Para todos los efectos de esta ley será causal de secreto o reserva en virtud de la que se podrá denegar total o parcialmente el acceso a la información, cuando la publicidad, comunicación o conocimiento de dicha información, particularmente en lo que se refiere al estado de salud y tratamiento de las personas y los referidos a menores de edad, afecte los derechos de las mismas, en especial, la esfera de su vida privada.

Sin perjuicio de lo anterior, la Superintendencia, conforme a la ley N° 19.628, al reglamento y a las instrucciones que dicte al efecto, podrá proporcionar acceso a la información que conste en la Base de Datos, asegurando la privacidad de los datos personales y sensibles que pueda contener. Estos datos se entregarán únicamente de forma innominada.

Artículo 45.- Deber de reserva y secreto absoluto del personal. El personal de la Superintendencia deberá guardar reserva y secreto absoluto respecto de las informaciones de las cuales tome conocimiento en el cumplimiento de sus labores respecto del Beneficio, sin perjuicio de las informaciones y certificaciones que deba proporcionar de conformidad a la ley. Asimismo, deberá abstenerse de usar dicha información en beneficio propio o de terceros. Los hechos que configuren infracciones a lo indicado se considerarán que vulneran gravemente el principio de probidad administrativa, sin perjuicio de las demás sanciones y responsabilidades que procedan conforme a las reglas generales.

Artículo 46.- Dirección de Presupuestos y Datos Personales. La Dirección de Presupuestos estará facultada para exigir los datos personales contenidos en la Base de Datos a que se refiere el artículo 36° de la presente ley y la información que fuere necesaria a la Sociedad Administradora del Fondo, sólo con el objeto de realizar los estudios señalados en el artículo 17.

En tal caso, el tratamiento y uso de los datos personales que efectúe quedarán dentro del ámbito de control y fiscalización de dicho servicio.

El personal de la Dirección de Presupuestos deberá guardar absoluta reserva y secreto de la información de que tome conocimiento y abstenerse de usar dicha información en beneficio propio o de terceros. Para efectos de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 125 de la ley N° 18.834, cuyo texto refundido,

coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 29, de 200429, del Ministerio de Hacienda, se estimará que los hechos que configuren infracciones a esta disposición vulneran gravemente el principio de probidad administrativa, sin perjuicio de las demás sanciones y responsabilidades que procedan.

Párrafo 8°

De la Fiscalización y Sanciones

Artículo 47.- Fiscalización por parte de la Superintendencia de Pensiones. La supervigilancia, control y la fiscalización del Beneficio y del Fondo corresponderá a la Superintendencia. Asimismo, le corresponderá la supervigilancia y fiscalización de la Sociedad Administradora. Para estos efectos, la Superintendencia estará investida de las mismas facultades que su normativa legal y reglamentaria le otorgue respecto de los organismos sometidos a su fiscalización.

En el ejercicio de estas facultades, la Superintendencia podrá dictar normas e instrucciones que serán obligatorias para todas las instituciones o entidades que participen en la administración del Beneficio o del otorgamiento y pago de sus beneficios.

En caso de incumplimiento de sus obligaciones por parte de la Sociedad Administradora, la Superintendencia podrá imponer a ésta las sanciones establecidas en el decreto ley N° 3.500 y el decreto con fuerza de ley N° 101, de 1980, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que establece el Estatuto Orgánico de la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones, su organización y atribuciones, sin perjuicio de los establecido en los artículos siguientes.

29 La medida disciplinaria de destitución procederá sólo cuando los hechos constitutivos de la infracción vulneren gravemente el principio de probidad administrativa, y en los siguientes casos :

- a) Ausentarse de la institución por más de tres días consecutivos, sin causa justificada;
- b) Infringir las disposiciones de las letras i), j), k) y l) del artículo 84 de este Estatuto;
- c) Condena por crimen o simple delito, y
- d) Efectuar denuncias de irregularidades o de faltas al principio de probidad de las que haya afirmado tener conocimiento, sin fundamento y respecto de las cuales se constatare su falsedad o el ánimo deliberado de perjudicar al denunciado.
- e) En los demás casos contemplados en este Estatuto o leyes especiales.

Artículo 48.- Infacción Grave de la Sociedad Administradora. Se considerará infracción grave de la Sociedad Administradora a las disposiciones de esta ley:

- a) No completar dentro del plazo de seis meses el capital mínimo exigido, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 30.
- b) No asegurar la continuidad de la prestación del servicio de administración en condiciones de absoluta normalidad y en forma ininterrumpida, según lo prescrito por el artículo 27.
- c) Las demás establecidas en las bases de licitación o en el contrato de administración del Beneficio.

Estas infracciones serán sancionadas con el cese de la administración ordinaria de la Sociedad, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 32.

Artículo 49.- Obtención indebida del Beneficio. Todo aquel que con el objeto de percibir beneficios indebidos de esta ley, para sí o para terceros, proporcione, declare o entregue a sabiendas datos o antecedentes falsos, incompletos o erróneos, será sancionado con las penas establecidas en el artículo 467³⁰ del Código Penal.

Sin perjuicio de las penas aplicadas en conformidad al inciso precedente, el infractor deberá restituir al Fondo las sumas indebidamente percibidas, reajustadas en conformidad a la variación que experimente el índice de precios al consumidor determinado por el Instituto Nacional de Estadísticas o el organismo que lo reemplace, entre el mes anterior a aquél en que se percibieron dichas sumas y el que antecede a la restitución.

La responsabilidad de realizar las gestiones necesarias para la restitución de las sumas indebidamente percibidas corresponderá a la Sociedad Administradora.

30 Artículo 467.- El que defraudare a otro en la sustancia, cantidad o calidad de las cosas que le entregare en virtud de un título obligatorio, será penado:

- 1.º Con presidio menor en sus grados medio a máximo y multa de once a quince unidades tributarias mensuales, si la defraudación excediera de cuarenta unidades tributarias mensuales.
- 2.º Con presidio menor en su grado medio y multa de seis a diez unidades tributarias mensuales, si excediere de cuatro unidades tributarias mensuales y no pasare de cuarenta unidades tributarias mensuales.
- 3.º Con presidio menor en su grado mínimo y multa de cinco unidades tributarias mensuales, si excediere de una unidad tributaria mensual y no pasare de cuatro unidades tributarias mensuales.

Si el valor de la cosa defraudada excediere de cuatrocientas unidades tributarias mensuales, se aplicará la pena de presidio menor en su grado máximo y multa de veintiuna a treinta unidades tributarias mensuales.

Artículo 50.- Infracciones. Ninguna persona natural o jurídica que no se hubiere constituido conforme a las disposiciones de esta ley como Sociedad Administradora del Beneficio, podrá arrogarse la calidad de tal o hacer uso de documentos que contengan nombres u otras palabras que sugieran que los negocios a que se dedican dichas personas son los de la Sociedad Administradora.

Las infracciones al inciso anterior se sancionarán con la pena de presidio menor en sus grados mínimo a medio. En todo caso, si a consecuencia de estas actividades ilegales, el público sufre perjuicio de cualquier naturaleza, los responsables serán castigados con las penas establecidas en el artículo 467³¹ del Código Penal.

Cuando a juicio de la Superintendencia pueda presumirse que existe una infracción a lo dispuesto en este artículo, ella tendrá respecto de los presuntos infractores las mismas facultades que su ley orgánica le confiere para con sus instituciones fiscalizadas.

TÍTULO II

MODIFICACIONES AL CÓDIGO DEL TRABAJO

Artículo 51.- Introdúzcanse las siguientes modificaciones al Código del Trabajo, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 1, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, de 2003:

1. Derógase el artículo 95 bis³².
2. Remplázase el artículo 203³³, por el siguiente:

31 Véase nota al artículo 49.

32 Artículo 95 bis, que se deroga:

Art. 95 bis. Para dar cumplimiento a la obligación contenida en el artículo 203, los empleadores cuyos predios o recintos de empaque se encuentren dentro de una misma comuna, podrán habilitar y mantener durante la respectiva temporada, uno o más servicios comunes de sala cuna.

33 Artículo 203, se deroga por sustitución:

Art. 203. Las empresas que ocupan veinte o más trabajadoras de cualquier edad o estado civil, deberán tener salas anexas e independientes del local de trabajo, en donde las mujeres puedan dar alimento a sus hijos menores de dos años y dejarlos mientras estén en el trabajo. Igual obligación corresponderá a los centros o complejos comerciales e industriales y de servicios administrados bajo una misma razón social o personalidad jurídica, cuyos establecimientos ocupen entre todos, veinte o más trabajadoras. El mayor gasto que signifique la sala cuna se entenderá común y deberán concurrir a él todos los establecimientos en la misma proporción de los demás gastos de ese carácter.

“Artículo 203.- Los trabajadores dependientes del sector privado regidos por este Código, que tengan hijos menores de dos años de edad, tendrán derecho al Beneficio Social de Educación Parvularia en Nivel de Sala Cuna en conformidad a la ley que Crea el Beneficio Social de Educación en el Nivel de Sala Cuna, financiado por un fondo solidario y a las demás normas legales establecidas al efecto.”

3. Derógase el artículo 205³⁴.

4. Modifícase el artículo 206, de la siguiente manera:

- a) Suprímase en el inciso cuarto la expresión: “aun cuando no goce del derecho a sala cuna, según lo preceptuado en el artículo 203”.
- b) Reemplázase el inciso quinto, la oración “de empresas que estén obligadas a lo” por la oración “de trabajadores que tengan derecho al Beneficio, de acuerdo a lo preceptuado”³⁵.

Las salas cunas señaladas en el inciso anterior deberán contar con autorización de funcionamiento o reconocimiento oficial del Estado, ambos otorgados por el Ministerio de Educación.

Con todo, los establecimientos de las empresas a que se refiere el inciso primero, y que se encuentren en una misma área geográfica, podrán, previa autorización del Ministerio de Educación, construir o habilitar y mantener servicios comunes de salas cunas para la atención de los niños de las trabajadoras de todos ellos.

En los períodos de vacaciones determinados por el Ministerio de Educación, los establecimientos educacionales podrán ser facilitados para ejercer las funciones de salas cunas. Para estos efectos, la Junta Nacional de Jardines Infantiles podrá celebrar convenios con el Servicio Nacional de la Mujer, las municipalidades u otras entidades públicas o privadas.

Se entenderá que el empleador cumple con la obligación señalada en este artículo si paga los gastos de sala cuna directamente al establecimiento al que la mujer trabajadora lleve sus hijos menores de dos años.

El empleador designará la sala cuna a que se refiere el inciso anterior, de entre aquellas que cuenten con la autorización de funcionamiento o reconocimiento oficial del Ministerio de Educación.

El empleador pagará el valor de los pasajes por el transporte que deba emplearse para la ida y regreso del menor al respectivo establecimiento.

El trabajador o trabajadora a quienes, por sentencia judicial, se le haya confiado el cuidado personal del menor de dos años, tendrá los derechos establecidos en este artículo si éstos ya fueran exigibles a su empleador.

Lo anterior se aplicará, además, si la madre fallece, salvo que el padre haya sido privado del cuidado personal por sentencia judicial.

34 Artículo 205, que se deroga:

Artículo 205.- El mantenimiento de las salas cunas será de costo exclusivo del o los empleadores, quienes deberán tener una persona competente a cargo de la atención y cuidado de los niños, en los términos establecidos en las normas sobre autorización de funcionamiento o reconocimiento oficial, según corresponda.

35 El artículo 206 quedaría con la siguiente redacción:

Art. 206. Las trabajadoras tendrán derecho a disponer, a lo menos, de una hora al día, para dar alimento a sus hijos menores de dos años. Este derecho podrá ejercerse de alguna de las siguientes formas a acordar con el empleador:

- a) En cualquier momento dentro de la jornada de trabajo.
- b) Dividiéndolo, a solicitud de la interesada, en dos porciones.
- c) Postergando o adelantando en media hora, o en una hora, el inicio o el término de la jornada de trabajo.

Este derecho podrá ser ejercido preferentemente en la sala cuna, o en el lugar en que se encuentre el menor.

Para todos los efectos legales, el tiempo utilizado se considerará como trabajado.

El derecho a alimentar consagrado en el inciso primero, no podrá ser renunciado en forma alguna y le será aplicable a toda trabajadora que tenga hijos menores de dos años,

Artículo 52.- Los artículos 203 y 205 del Código del Trabajo vigentes con anterioridad a las modificaciones que se les introducen en el artículo 51° de la presente ley, seguirán rigiendo para todos los órganos públicos del Estado creados por la Constitución Política de la República o la ley y para todos los servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa, cualquiera sea el número de sus trabajadores y el régimen de contratación a que estén sujetos, y no le serán aplicables a su respecto las normas que regulan el Beneficio Social de Educación Parvularia en Nivel de Sala Cuna, ni les será aplicable la cotización de cargo del empleador establecida en el artículo 16° de la presente ley. Sin embargo, a las empresas públicas creadas por ley y a las corporaciones municipales les serán aplicables las normas de dicho Beneficio.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso precedente, las menciones a la Junta Nacional de Jardines Infantiles que realiza el artículo 203 del Código del Trabajo, vigente con anterioridad a las modificaciones que introduce esta ley, deberán entenderse realizadas al Ministerio de Educación.

TÍTULO III

MODIFICACIONES A OTROS CUERPOS LEGALES

Artículo 53.- Agrégase al artículo 19 de la ley 18.833, que establece un nuevo estatuto general para las cajas de compensación de asignación familiar (C.C.A.F.), sustitutivo del actual contenido en el decreto con fuerza de ley N° 42, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, un nuevo numeral 10 pasando el actual a ser numeral 11, del siguiente tenor:

aun cuando no goce del derecho a sala cuna, según lo preceptuado en el artículo 203.

Tratándose de trabajadores que tengan derecho al Beneficio, de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 203, el período de tiempo a que se refiere el inciso primero se ampliará al necesario para el viaje de ida y vuelta de la madre para dar alimentos a sus hijos. En este caso, el empleador pagará el valor de los pasajes por el transporte que deba emplearse para la ida y regreso de la madre.

En caso que el padre y la madre sean trabajadores, ambos podrán acordar que sea el padre quien ejerza el derecho. Esta decisión y cualquier modificación de la misma deberán ser comunicadas por escrito a ambos empleadores con a lo menos treinta días de anticipación, mediante instrumento firmado por el padre y la madre, con copia a la respectiva Inspección del Trabajo.

Con todo, el padre trabajador ejercerá el referido derecho cuando tuviere la tuición del menor por sentencia judicial ejecutoriada, cuando la madre hubiere fallecido o estuviere imposibilitada de hacer uso de él.

Asimismo, ejercerá este derecho la trabajadora o el trabajador al que se le haya otorgado judicialmente la tuición o el cuidado personal de conformidad con la ley N° 19.620 o como medida de protección de acuerdo con el número 2 del artículo 30 de la Ley de Menores. Este derecho se extenderá al cónyuge, en los mismos términos señalados en los incisos anteriores.

“10.- Constituir sociedades con el objeto de administrar el Beneficio y el Fondo de acuerdo a ley que crea un fondo solidario para beneficio social de educación parvularia en nivel de sala cuna”³⁶.

Artículo 54.- Introdúzcanse las siguientes modificaciones a la Ley N° 19.728, que establece un seguro de desempleo:

1. Derógase el literal c) del inciso primero del artículo 5°³⁷.

36 El artículo 19 quedaría con la siguiente redacción:

Artículo 19.- Corresponderá a las Cajas de Compensación la administración de prestaciones de seguridad social. Para el cumplimiento de este objeto desempeñarán las siguientes funciones.

- 1.- La afiliación de las entidades empleadoras;
- 2.- Administrar, los regímenes de prestaciones familiares, de subsidios de cesantía y de subsidios por incapacidad laboral respecto de sus trabajadores afiliados afectos al Código del Trabajo del sector privado, de las empresas autónomas del Estado y de aquellas en que éste o las entidades del sector público tengan participación mayoritaria y de los regidos por la ley N° 19.070, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado está contenido en el decreto con fuerza de ley N° 1, de 1996, del Ministerio de Educación, y por la ley N° 19.378.
- 3.- Administrar, respecto de los trabajadores afiliados, el régimen de prestaciones de crédito social, el régimen de prestaciones adicionales y el régimen de prestaciones complementarias que se establezcan en conformidad a la presente ley;
- 4.- Recaudar y controlar la declaración y pago de las cotizaciones que correspondan conforme al N° 2 anterior para el régimen de subsidios por incapacidad laboral;
- 5.- Invertir los recursos disponibles;
- 6.- Efectuar las compensaciones que procedan con los empleadores afiliados y con fondos y entidades previsionales;
- 7.- Prestar servicios, mediante convenios, a entidades que administren prestaciones de seguridad social;
- 8.- Promover, organizar, coordinar y ejecutar iniciativas y acciones que tengan por objeto mejorar el bienestar social de los trabajadores afiliados y su núcleo familiar, y
- 9.- Constituir sociedades con el objeto exclusivo de emitir y operar medios de pago con provisión de fondos, en los términos establecidos en la ley que autoriza la emisión de estos medios de pago por entidades no bancarias y a la normativa dictada conforme a ella. Las sociedades constituidas en virtud de este numeral quedarán sujetas a la fiscalización de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, quedando los administradores de la Caja de Compensación obligados a cumplir los requisitos de integridad contemplados en el artículo 28 de la Ley General de Bancos.
- 10.- Constituir sociedades con el objeto de administrar el Beneficio y el Fondo de acuerdo a ley que crea un fondo solidario para beneficio social de educación parvularia en nivel de sala cuna.
- 11.- (10) Efectuar las demás funciones que establezca la ley.

Las Cajas de Compensación estarán facultadas para celebrar convenios con el Fondo Nacional de Salud, sobre otorgamiento de credenciales de salud, venta, emisión y pago de órdenes de atención, y, otorgamiento y cobro de los préstamos que establece el artículo 31 de la ley N° 18.469.

37 El artículo 5 quedaría con la siguiente redacción:

Artículo 5°.- El Seguro se financiará con las siguientes cotizaciones:

- a) Un 0,6% de las remuneraciones imponibles, de cargo del trabajador con contrato de duración indefinida.
- b) Un 2,4% de las remuneraciones imponibles, en el caso de los trabajadores con contrato de duración indefinida y un 3% de las remuneraciones imponibles para los trabajadores con contrato a plazo fijo, o por obra, trabajo o servicio determinado. Ambos, de cargo del empleador.
- ~~c) Un aporte del Estado que ascenderá anualmente a un total de 225.792 unidades tributarias mensuales, las que se enterarán en 12 cuotas mensuales de 18.816 unidades tributarias mensuales.~~

Con todo, si el contrato a plazo fijo se hubiere transformado en contrato de duración indefinida, el trabajador quedará afecto a la cotización prevista en la letra a) y el empleador a la establecida en la letra b) de este artículo para los contratos de duración indefinida, a contar de la fecha en que se hubiere producido tal transformación, o a contar del día siguiente al vencimiento del período de quince meses a que alude el N°4 del artículo 159 del Código del Trabajo, según corresponda.

2. Suprímase en el artículo 23° la frase: “, y el aporte fiscal a que se refiere la letra c) del mismo artículo”³⁸.
3. Suprímase en el inciso 2° del artículo 30° la frase: “y del aporte establecido en la letra c) de dicho artículo”³⁹.

Para todos los efectos legales, las cotizaciones referidas en las letras a) y b) precedentes tendrán el carácter de provisionales.

El empleador deberá comunicar la iniciación o la cesación de los servicios de sus trabajadores a la Sociedad Administradora dentro del plazo de diez días contado desde dicha iniciación o término, el que aumentará en tres días en los casos en que esta comunicación se efectúe por vía electrónica. La infracción a esta obligación será sancionada con multa a beneficio fiscal equivalente a 0,5 unidades de fomento, cuya aplicación se sujetará a lo dispuesto en el inciso sexto del artículo 19 del decreto ley N° 3.500, de 1980.

- 38 El artículo 23 quedaría con la siguiente redacción:

Artículo 23.- La restante cotización del empleador a que se refiere la letra b) del artículo 5°, esto es el 0,8% y 0,2% de las remuneraciones imponibles del trabajador de contrato a plazo indefinido y de contrato a plazo, o para una obra, trabajo o servicio determinado, respectivamente, ~~y el aporte fiscal a que se refiere la letra c) del mismo artículo;~~ ingresarán a un fondo denominado Fondo de Cesantía Solidario, que deberá mantener la Sociedad Administradora, para los efectos de otorgar las prestaciones por cesantía, en conformidad a los artículos siguientes.

- 39 El artículo 30 quedaría con la siguiente redacción:

Artículo 30.- La administración del Régimen de Cesantía estará a cargo de una sociedad anónima de nacionalidad chilena o agencia de una extranjera constituida en Chile, de giro único, que tendrá como objeto exclusivo administrar dos Fondos que se denominarán Fondo de Cesantía y Fondo de Cesantía Solidario y otorgar y administrar las prestaciones y beneficios que establece esta ley.

La Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía deberá prestar los servicios de recaudación de las cotizaciones previstas en las letras a) y b) del artículo 5° ~~y del aporte establecido en la letra c) de dicho artículo;~~ su abono en el Fondo de Cesantía Solidario y en las respectivas Cuentas Individuales por Cesantía, la actualización de éstas, la inversión de los recursos y el pago de los beneficios.

La Sociedad Administradora será de duración indefinida y subsistirá hasta el cumplimiento del plazo de vigencia del contrato de administración. Disuelta aquélla, se aplicará lo dispuesto en los artículos 109 y siguientes de la ley N° 18.046. Con todo, para dar término al proceso de liquidación de la Sociedad

Administradora, se requerirá la aprobación de la cuenta de la liquidación por la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones.

La Sociedad Administradora tendrá derecho a una retribución establecida sobre la base de comisiones, de cargo de los aportantes, la que será deducida de los aportes o de los Fondos de Cesantía. El valor base de las comisiones antes mencionadas se determinará en el contrato de prestación del servicio de administración. Con todo, el valor de las comisiones cobradas se establecerá conforme lo señalado en el artículo 42, y sólo podrán estar sujetos al cobro de comisiones los trabajadores que se encuentren cotizando. Las referidas comisiones estarán exentas del Impuesto al Valor Agregado, establecido en el Título II del decreto ley N° 825, de 1974.

Ninguna persona natural o jurídica que no se hubiere constituido conforme a las disposiciones de esta ley como Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía, podrá arrogarse la calidad de tal o hacer uso de documentos que contengan nombres u otras palabras que sugieran que los negocios a que se dedican dichas personas son los de la Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía.

Las infracciones al inciso anterior se sancionarán con las penas de presidio menor en su grado mínimo a presidio menor en su grado medio. En todo caso, si a consecuencia de estas actividades ilegales, el público sufre perjuicio de cualquier naturaleza, los responsables serán castigados con las penas establecidas en el artículo 467 del Código Penal.

Cuando a juicio de la Superintendencia pueda presumirse que existe una infracción a lo dispuesto en este artículo, ella tendrá respecto de los presuntos infractores las mismas facultades de inspección que su ley orgánica le confiere para con sus instituciones fiscalizadas.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo primero transitorio.- Inicio Operaciones Sociedad Administradora. El inicio de las operaciones de la primera sociedad administradora del Beneficio establecido en esta ley será el día primero del mes siguiente de la publicación de la resolución de la Superintendencia que autorice el inicio de las operaciones de la Sociedad Administradora, la que deberá dictarse en todo caso en un plazo máximo de doce meses a contar de la publicación de la presente ley en el Diario Oficial.

Artículo segundo transitorio.- Implementación de Obligación de Declaración y Pago. La obligación de declaración y pago de la cotización a que se refiere la letra a) del artículo 16 de la presente ley, para los trabajadores dependientes, comenzará a regir desde la fecha de inicio de operaciones de la Sociedad Administradora, y para los trabajadores independientes, doce meses desde la fecha de inicio de las operaciones de la Sociedad Administradora.

Artículo tercero transitorio.- Inicio Prestaciones del Beneficio. Para los trabajadores dependientes, las prestaciones del Beneficio establecidas en la presente ley comenzarán a otorgarse a contar del primer día del sexto mes siguiente al inicio de las operaciones de la Sociedad Administradora.

Para los trabajadores independientes, comenzarán a otorgarse a contar del primer día del decimotercero mes siguiente al inicio de las operaciones de la Sociedad Administradora.

Artículo cuarto transitorio.- Modificaciones al Código del Trabajo. Las modificaciones introducidas en el artículo 51° de la presente ley al Código del Trabajo entrarán en vigencia a contar del primer día del sexto mes siguiente al inicio de las operaciones de la Sociedad Administradora del Beneficio.

Artículo quinto transitorio.- Regla especial de trabajadores que estén usando el beneficio del Artículo 203° a la fecha de entrada en régimen del Beneficio. En el período que medie entre el inicio de operaciones de la Sociedad Administradora y la entrada en régimen de las prestaciones del Beneficio de acuerdo a lo indicado en el artículo Tercero Transitorio, los empleadores que a la fecha de publicación de la ley se encuentren obligados a prestar servicio de sala cuna a sus trabajadores de acuerdo al artículo 203 del Código del Trabajo, deberán seguir cumpliendo con esta obligación y además dar cumplimiento a la obligación de declaración y pago de la cotización obligatoria establecida en el artículo 16 letra a) de la presente ley.

Con todo, los empleadores indicados en el inciso anterior tendrán derecho a partir del primer día del sexto mes siguiente al inicio de operaciones de la Sociedad Administradora a solicitar a esta entidad que haga devolución del menor monto entre las cotizaciones establecidas en la presente ley enteradas o el costo de las prestaciones del servicio de sala cuna, ambos calculados en el período que medie entre el inicio de operaciones de la Sociedad Administradora y la entrada en régimen de las prestaciones del Beneficio.

Artículo sexto transitorio.- Beneficios pactados con anterioridad a la entrada en régimen de la ley. Los empleadores que hayan pactado, individual o colectivamente, beneficios de sala cuna o bonificaciones compensatorias a la misma con sus trabajadores dependientes con anterioridad a la entrada en régimen de las prestaciones establecidas en la presente ley, deberán seguir cumpliendo con dichas obligaciones hasta el término de la vigencia de las mismas y en cualquier caso hasta el mes trigésimo sexto contado desde la fecha de publicación de la Ley en el Diario Oficial, oportunidad a partir de la cual quedará sin efecto cualquier acuerdo individual o colectivo sobre la materia y se aplicará el Beneficio en la forma establecida en la presente ley, salvo que las partes pacten lo contrario.

Artículo séptimo transitorio.- Funcionamiento de establecimientos. Hasta el plazo establecido en el artículo tercero transitorio de la ley N° 20.832 y el artículo quince transitorio de la ley N° 20.529, los establecimientos a los que se refiere los artículos 9 y 52 de la presente ley, funcionarán bajo la misma normativa que los rija hasta dicho plazo.

Artículo octavo.- Entrada en vigencia modificaciones a la Ley 19.728. Las modificaciones a la Ley 19.728 que introduce el artículo 57 de la presente ley, entrarán en vigencia a partir de la fecha de inicio de operaciones de la Sociedad Administradora, de acuerdo a lo establecido en el artículo primero transitorio. El aporte del Estado al Fondo al que se refiere el literal b) del artículo 16° de la presente ley, se entregará por el saldo que reste en el año calendario.

Artículo noveno transitorio.- Excepción al procedimiento de solicitud del beneficio. Durante el periodo de veinticuatro meses contados desde la fecha de publicación de la presente ley, el procedimiento para acceder al beneficio establecido en el artículo 10, no les será exigible a los Beneficiarios respecto del niño o niña causante de dicho beneficio, que asista a un establecimiento de educación parvularia financiado con aportes regulares del Estado.

Artículo décimo transitorio.- Aumento de Dotación Superintendencia. Aumentase la dotación máxima de personal de la Superintendencia en un máximo de 6 cupos a partir del día primero del mes siguiente al de la fecha de inicio de operaciones de la Sociedad Administradora.

Artículo décimo primero transitorio.- Mayor Gasto Fiscal. El mayor gasto fiscal que signifique la aplicación de esta ley durante su primer año presupuestario de vigencia se financiará con cargo al presupuesto del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. No obstante, el Ministerio de Hacienda con cargo a la Partida Presupuestaria del Tesoro Público, podrá suplementar el presupuesto de dicho Ministerio en la parte del gasto que no se pudiese financiar con dichos recursos.

ANEXO I

ARTÍCULO 197 BIS DEL CÓDIGO DEL TRABAJO

Artículo 197 bis.- Las trabajadoras tendrán derecho a un permiso postnatal parental de doce semanas a continuación del período postnatal, durante el cual recibirán un subsidio cuya base de cálculo será la misma del subsidio por descanso de maternidad a que se refiere el inciso primero del artículo 195.

Con todo, la trabajadora podrá reincorporarse a sus labores una vez terminado el permiso postnatal, por la mitad de su jornada, en cuyo caso el permiso postnatal parental se extenderá a dieciocho semanas. En este caso, percibirá el cincuenta por ciento del subsidio que le hubiere correspondido conforme al inciso anterior y, a lo menos, el cincuenta por ciento de los estipendios fijos establecidos en el contrato de trabajo, sin perjuicio de las demás remuneraciones de carácter variable a que tenga derecho.

Las trabajadoras exentas del límite de jornada de trabajo, de conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 22, podrán ejercer el derecho establecido en el inciso anterior, en los términos de dicho precepto y conforme a lo acordado con su empleador.

Para ejercer los derechos establecidos en los incisos segundo, tercero y octavo, la trabajadora deberá dar aviso a su empleador mediante carta certificada, enviada con a lo menos treinta días de anticipación al término del período postnatal, con copia a la Inspección del Trabajo. De no efectuar esta comunicación, la trabajadora deberá ejercer su permiso postnatal parental de acuerdo a lo establecido en el inciso primero.

El empleador estará obligado a reincorporar a la trabajadora salvo que, por la naturaleza de sus labores y las condiciones en que aquella las desempeña, estas últimas sólo puedan desarrollarse ejerciendo la jornada que la trabajadora cumplía antes de su permiso prenatal. La negativa del empleador a la reincorporación parcial deberá ser fundamentada e informada a la trabajadora, dentro de los tres días de recibida la comunicación de ésta, mediante carta certificada, con copia a la Inspección del Trabajo en el mismo acto. La trabajadora podrá reclamar de dicha negativa ante la referida entidad, dentro de tres días hábiles contados desde que tome conocimiento de la comunicación de su empleador. La Inspección del Trabajo resolverá si la naturaleza de las labores y condiciones en las que éstas son desempeñadas justifican o no la negativa del empleador.

En caso de que la trabajadora opte por reincorporarse a sus labores de conformidad a lo establecido en este artículo, el empleador deberá dar aviso a la entidad pagadora del subsidio antes del inicio del permiso postnatal parental.

Con todo, cuando la madre hubiere fallecido o el padre tuviere el cuidado personal del menor por sentencia judicial, le corresponderá a éste el permiso y subsidio establecidos en los incisos primero y segundo.

Si ambos padres son trabajadores, cualquiera de ellos, a elección de la madre, podrá gozar del permiso postnatal parental, a partir de la séptima semana del mismo, por el número de semanas que ésta indique. Las semanas utilizadas por el padre deberán ubicarse en el período final del permiso y darán derecho al subsidio establecido en este artículo, calculado en base a sus remuneraciones. Le será aplicable al trabajador lo dispuesto en el inciso quinto.

En caso de que el padre haga uso del permiso postnatal parental, deberá dar aviso a su empleador mediante carta certificada enviada, a lo menos, con diez días de anticipación a la fecha en que hará uso del mencionado permiso, con copia a la Inspección del Trabajo. Copia de dicha comunicación deberá ser remitida, dentro del mismo plazo, al empleador de la trabajadora. A su vez, el empleador del padre deberá dar aviso a las entidades pagadoras del subsidio que correspondan, antes del inicio del permiso postnatal parental que aquél utilice.

El subsidio derivado del permiso postnatal parental se financiará con cargo al Fondo Único de Prestaciones Familiares y Subsidio de Cesantía del decreto con fuerza de ley N°150, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, de 1982.

El empleador que impida el uso del permiso postnatal parental o realice cualquier práctica arbitraria o abusiva con el objeto de dificultar o hacer imposible el uso del permiso establecido en los incisos precedentes, será sancionado con multa a beneficio fiscal de 14 a 150 unidades tributarias mensuales. Cualquier infracción a lo dispuesto en este inciso podrá ser denunciada a la Inspección del Trabajo, entidad que también podrá proceder de oficio a este respecto.

ANEXO II

ARTÍCULO 19 DEL DECRETO LEY 3.500, DE 1980:

Artículo 19º Las cotizaciones establecidas en este Título deberán ser declaradas y pagadas por el empleador, el trabajador independiente a que se refiere el inciso tercero del artículo 90, el afiliado voluntario a que se refiere el Título IX o la entidad pagadora de subsidios, según corresponda, en la Administradora de Fondos de Pensiones a que se encuentre afiliado el trabajador, dentro de los diez primeros días del mes siguiente a aquél en que se devengaron las remuneraciones y rentas afectas a aquéllas, o aquel en que se autorizó la licencia médica por la entidad correspondiente, en su caso, término que se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente si dicho plazo expirare en día sábado, domingo o festivo. El trabajador independiente a que se refiere el inciso primero del artículo 90 pagará las cotizaciones a que se refiere este Título, en la forma y oportunidad que establece el artículo 92 F.

Para este efecto, el empleador deducirá las cotizaciones de las remuneraciones del trabajador y pagará las que sean de su cargo. Ambas cotizaciones se encontrarán afectas a lo dispuesto en el presente artículo.

Cuando un empleador realice la declaración y el pago de cotizaciones a través de un medio electrónico, el plazo mencionado en el inciso primero se extenderá hasta el día 13 de cada mes, aun cuando éste fuere día sábado, domingo o festivo.

Los afiliados voluntarios podrán enterar sus cotizaciones en forma mensual o mediante un solo pago por más de una renta o ingreso mensual, con un máximo de doce meses, aplicándose para efectos de la determinación del monto de las cotizaciones, del ingreso base y de los beneficios a que habrá lugar, las normas de los párrafos 1º y 2º del Título IX, en lo que corresponda. La Superintendencia regulará las materias relacionadas con el pago de estas cotizaciones mediante una norma de carácter general.

El empleador o la entidad pagadora de subsidios que no pague oportunamente, y cuando le correspondiere, según el caso, las cotizaciones de los trabajadores o subsidiados, deberá declararlas en la Administradora correspondiente, dentro del plazo señalado en el inciso primero de este artículo.

La declaración deberá contener, a lo menos, el nombre, rol único tributario y domicilio de la persona natural o jurídica que efectúa la declaración, con indicación del representante legal de ella cuando proceda, nombre y rol único tributario de los trabajadores o subsidiados y el monto de las respectivas remuneraciones imponibles. En caso de no realizar esta declaración dentro del plazo que corresponda, el empleador tendrá hasta el último día hábil del mes subsiguiente del vencimiento de aquél, para acreditar ante la Administradora respectiva la extinción de su obligación de enterar las cotizaciones previsionales de sus trabajadores, debido al término o suspensión de la relación laboral que mantenían. A su vez, las

Administradoras deberán agotar las gestiones que tengan por objeto aclarar la existencia de cotizaciones previsionales impagas y, en su caso, obtener el pago de aquéllas de acuerdo a las normas de carácter general que emita la Superintendencia. Para estos efectos, si la Administradora no tuviere constancia del término de la relación laboral de aquellos trabajadores que registran cotizaciones previsionales impagas, deberá consultar respecto de dicha circunstancia a la Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía. Transcurrido el plazo de acreditación de cese o suspensión de la relación laboral, sin que se haya acreditado dicha circunstancia, se presumirá sólo para los efectos del presente artículo e inicio de las gestiones de cobranza conforme a las disposiciones del inciso décimo noveno de este artículo, que las respectivas cotizaciones están declaradas y no pagadas.

Si el empleador o la entidad pagadora de subsidios no efectúa oportunamente la declaración a que se refiere el inciso anterior, o si ésta es incompleta o errónea, será sancionado con una multa a beneficio fiscal de 0,75 unidades de fomento por cada trabajador o subsidiado cuyas cotizaciones no se declaren o cuyas declaraciones sean incompletas o erróneas. Si la declaración fuere incompleta o errónea y no existen antecedentes que permitan presumir que es maliciosa, quedará exento de esa multa el empleador o la entidad pagadora de subsidios que pague las cotizaciones dentro del mes calendario siguiente a aquél en que se devengaron las remuneraciones respectivas. Tratándose de empleadores de trabajadores de casa particular, la multa será de 0,2 unidades de fomento para el caso que las cotizaciones se paguen el mes subsiguiente a aquél en que se retuvieron de las remuneraciones de estos trabajadores, y de 0,5 unidades de fomento si se pagan después de esta fecha, aun cuando no hubieren sido declaradas.

Corresponderá a la Dirección del Trabajo la fiscalización del cumplimiento de las obligaciones establecidas en este artículo, estando investidos sus Inspectores de la facultad de aplicar las multas a que se refiere el inciso precedente, las que serán reclamables de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 474 del Código del Trabajo.

Si la declaración fuere incompleta o falsa y existiere un hecho que permita presumir que es maliciosa, el Director del Trabajo, quien sólo podrá delegar estas facultades en los Directores Regionales, podrá efectuar la denuncia ante el juez del crimen correspondiente.

Las cotizaciones que no se paguen oportunamente por el empleador o la entidad pagadora de subsidios, se reajustarán entre el último día del plazo en que debió efectuarse el pago y el día en que efectivamente se realice. Para estos efectos, se aumentarán considerando la variación diaria del Índice de Precios al Consumidor mensual del período comprendido entre el mes que antecede al mes anterior a aquel en que debió efectuarse el pago y el mes que antecede al mes anterior a aquel en que efectivamente se realice.

Para cada día de atraso la deuda reajustada devengará un interés penal equivalente a la tasa de interés corriente para operaciones reajustables en moneda nacional a que se refiere el artículo 6° de la ley N° 18.010, aumentado en un cincuenta por ciento.

Si en un mes determinado el reajuste e interés penal aumentado en la forma señalada en el inciso anterior, resultare de un monto total inferior al interés para operaciones no reajustables que fije la Superintendencia

de Bancos e Instituciones Financieras, o a la rentabilidad nominal de los últimos doce meses promedio de todos los Fondos de Pensiones, todas ellas aumentadas en un cincuenta por ciento, se aplicará la mayor de estas dos tasas, caso en el cual no corresponderá aplicación de reajuste. La rentabilidad nominal de los últimos doce meses promedio de todos los Fondos, se determinará calculando el promedio ponderado de la rentabilidad de todos ellos, de acuerdo a la proporción que represente el valor total de las cuotas de cada uno, en relación con el valor de las cuotas de todos los Fondos, al último día del mes anterior. La rentabilidad mencionada corresponderá a la del mes anteprecedente a aquél en que se devenguen los intereses, y será considerada una tasa para los efectos de determinar los intereses que procedan.

En todo caso, para determinar el interés penal, se aplicará la tasa vigente al día primero del mes inmediatamente anterior a aquél en que se devengue. El interés que se determine en conformidad a lo dispuesto en los incisos anteriores se capitalizará mensualmente.

Las Administradoras de Fondos de Pensiones estarán obligadas a seguir las acciones tendientes al cobro de las cotizaciones adeudadas y sus reajustes e intereses, aun cuando el afiliado se hubiere cambiado de ella. La Administradora, a la cual el afiliado hubiere traspasado sus fondos podrá intervenir en el juicio en calidad de coadyuvante. Con todo, las Administradoras no podrán perseguir, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° de la ley N° 17.322, el cobro de las cotizaciones previsionales adeudadas por los trabajadores independientes señalados en el artículo 89, por las rentas a que se refiere el inciso primero del artículo 90.

En los juicios de cobranza de cotizaciones previsionales se aplicarán las normas sobre acumulación de autos contenidas en el Título X del Libro I del Código de Procedimiento Civil y se decretará exclusivamente a petición de cualquiera de las Administradoras de Fondos de Pensiones involucradas.

Procederá la acumulación de autos cuando se trate del cobro de cotizaciones previsionales adeudadas a un trabajador por un mismo empleador, aun cuando las acciones judiciales se inicien por distintas Administradoras, correspondiendo acumular el o los juicios más nuevos al más antiguo.

Del mismo modo, procederá la acumulación de causas respecto de un empleador moroso que tuviere trabajadores bajo su dependencia afiliados a distintas Administradoras, correspondiendo acumular el o los juicios más nuevos al más antiguo.

Los representantes legales de las Administradoras de Fondos de Pensiones tendrán las facultades establecidas en el artículo 2° de la ley N° 17.322, con excepción de la que se señala en el número tercero de dicha disposición.

Serán aplicables todas las normas contenidas en los artículos 1°, 3°, 4°, 4° bis, 5°, 5° bis, 6°, 7°, 8°, 9°, 10 bis, 11, 12, 14, 18, 19, 20 y 25 bis, de la ley N° 17.322 al cobro de las cotizaciones,

reajustes e intereses adeudados a una Administradora de Fondos de Pensiones, incluso las sanciones penales establecidas en dicho cuerpo legal para los empleadores que no consignen las cotizaciones

que hubieren retenido o debido retener, las que podrán hacerse extensivas, en su caso, a las entidades pagadoras de subsidios.

Los reajustes e intereses, incluidos los recargos a que se refieren los incisos undécimo y duodécimo, serán abonados conjuntamente con el valor de las cotizaciones en la cuenta de capitalización individual del afiliado. Serán de beneficio de la Administradora sólo las costas de cobranza.

La prescripción que extingue las acciones para el cobro de cotizaciones previsionales, multas, reajustes e intereses, será de cinco años y se contará desde el término de los respectivos servicios.

Las cotizaciones previsionales, multas, reajustes e intereses que las Administradoras de Fondos de Pensiones tienen la obligación de cobrar, gozarán del privilegio establecido en el N° 5 del artículo 2.472 del Código Civil, conservando este privilegio por sobre los derechos de prenda y otras garantías establecidas en leyes especiales.

Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 12 y 14 de la Ley N° 17.322, se aplicarán las penas del artículo 467 del Código Penal al que en perjuicio del trabajador o de sus derechohabientes se apropiare o distrajere el dinero proveniente de las cotizaciones que se hubiere descontado de la remuneración del trabajador.

Los empleadores que no pagaren las cotizaciones establecidas en este Título, no podrán percibir recursos provenientes de instituciones públicas o privadas, financiados con cargo a recursos fiscales de fomento productivo, sin acreditar previamente ante las instituciones que administren los instrumentos referidos, estar al día en el pago de dichas cotizaciones. Sin embargo, podrán solicitar su acceso a tales recursos, los que sólo se cursarán acreditado que sea el pago respectivo.

Los empleadores que durante los 24 meses inmediatamente anteriores a la respectiva solicitud, hayan pagado dentro del plazo que corresponda las cotizaciones establecidas en este Título, tendrán prioridad en el otorgamiento de recursos provenientes de instituciones públicas o privadas, financiados con cargo a recursos fiscales de fomento productivo. Para efectos de lo anterior, deberán acreditar previamente, ante las instituciones que administren los instrumentos referidos, el cumplimiento del señalado requisito.



